

Señores

JUZGADO TERCERO (3°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI - VALLE

E. S. D.

RADICADO: VERBAL
RADICADO: 760013103003-**2022-00250**-00
DEMANDANTE: MARÍA RUBIELA GRIJALBA Y OTROS
DEMANDADO: MAPFRE SEGUROS COLOMBIA S.A. Y OTROS
LLAMADO EN GARANTÍA: MAPFRE SEGUROS COLOMBIA S.A.

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA REFORMA DE LA DEMANDA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **MAPFRE SEGUROS COLOMBIA S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, procedo a **CONTESTAR LA REFORMA A LA DEMANDA** promovida por MARÍA RUBIELA GRIJALBA y OTROS ; y, en segundo lugar, a **CONTESTAR LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA** formulados por HÉCTOR FABIO MORA RIVERA, GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. EN REORGANIZACIÓN y BANCOLOMBIA S.A., en contra de mi procurada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio, se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho.

Página 1 de 114

CONTESTACIÓN A LA REFORMA DE LA DEMANDA

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA

Procedo a pronunciarme frente a cada uno de los hechos de la demanda en la misma forma y en el mismo orden cronológico en que fueron planteados, así:

Frente al hecho “1”: A mi procurada no le consta de forma directa que en la fecha señalada por la activa de la acción se hubiera presentado un accidente de tránsito entre los vehículos de placa VCS-574 y KZE-12D como quiera que la misma no tuvo intervención alguna en tal hecho. Que se pruebe.

Frente al hecho “2”: Es cierto, como consta en el registro civil de nacimiento aportado junto con el libelo gestor.

Frente al hecho “3”: A mi procurada no le consta en forma directa la veracidad de este hecho, sin perjuicio de ello, es necesario señalar que el simple hecho de que entre dos personas haya una relación sentimental como la que se afirma tenían los señores Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) y Rubiela Grijalba, no implica, per se la existencia de una unión marital de hecho con todos sus elementos y mucho menos que de aquella se derive alguna presunción respecto a la dependencia económica entre estos. Que se pruebe.

Frente al hecho “4”: A mi procurada no le constas de forma directa lo expuesto en el presente apartado, como quiera que desconoce plenamente las relaciones filiales que en vida el señor Enrique Ávila (Q.E.P.D.), hubiera tenido en vida. Pese a ello, se observa en el plenario, copia de dos registros civiles.

Frente al hecho “5”: A mi mandante no le consta lo afirmado en este hecho, comoquiera

Página 2 de 114

que son hechos completamente ajenos al giro ordinario de sus negocios. Por ende, la parte demandante deberá probar lo contenido en este numeral.

Frente al hecho “6”: A mi procurada no le consta en forma alguna que para el momento de ocurrencia del hecho respecto al cual se sustenta este trámite el señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.) se desempeñara como “mecánico industrial” ni los ingresos que el mismo presuntamente percibía como contraprestación por tal labor. Se evidencia que dentro de los adjuntos al expediente no hay documento alguno o prueba siquiera sumaria que de cuenta de lo manifestado. Conforme a lo establecido al art. 167 del C.G.P., le corresponde a la activa demostrar cada una de las afirmaciones expuestas.

Frente al hecho “7”: A mi mandante no le consta directamente lo que se afirma en este numeral, toda vez que son hechos completamente ajenos al giro ordinario de sus negocios. Sin embargo, desde ya se llama la atención del despacho en que de conformidad con el informe policial de accidente de tránsito (IPAT) que ya consta en el plenario, se evidencia que el día 01 de julio del 2022 siendo las 16:35 se presentó un accidente de tránsito. Pese a ello, respecto a las circunstancias narradas por la activa, de como ocurrieron los presuntos hechos, se destaca que no es más que una apreciación subjetiva, ya que el IPAT no presenta observaciones respecto de la presunta ocurrencia de los hechos en la forma en que se afirma, por el contrario desde aquel documento se destaca que la hipótesis causal del accidente fue codificada con el numeral 142 *“pasar cuando el semáforo se encuentre en luz roja”*, para el vehículo tipo motocicleta en el cual se movilizaba el hoy fallecido. Por lo tanto, desde ya se advierte que no le asiste ningún tipo de responsabilidad a la parte demandada por el daño deprecado por los accionantes, pues sin duda ha operado la causal exonerativa de responsabilidad por el hecho de la víctima.

Frente al hecho “8”: El presente apartado relaciona varias afirmaciones, ante las cuales me pronuncio de la siguiente manera:

- A mi procurada no le consta, cual es el recorrido establecido para el vehículo de placa VCS-574, y si para el día señalada pudo haber presentado alguna modificación en su recorrido. Que se pruebe.
- Respecto de que el vehículo de placa VCS-574 al llegar a la calle 100 no quiso respetar la señal de semáforo en rojo, resulta propio manifestar que lo dicho por la activa no es más que una manifestación subjetiva, carete de fundamentos, encaminada únicamente al beneficio de la misma. Sin embargo, desde ya se destaca que en el IPAT que obra en el proceso se puede evidenciar que la hipótesis causal del accidente fue codificada con el numeral 142 *“pasar cuando el semáforo se encuentre en luz roja”*, para el vehículo tipo motocicleta en el cual se movilizaba el hoy fallecido. Por lo tanto, desde este momento se advierte que no le asiste ningún tipo de responsabilidad a la parte demandada por el daño deprecado por los accionantes, pues sin duda ha operado la causal exonerativa de responsabilidad por el hecho de la víctima.

Frente al hecho “9”: A mi representada no le consta lo expuesto en el presenta apartado, comoquiera que no presencié lo manifestado por la activa, y además porque los hechos en referencia son completamente ajenos al giro ordinario de los negocios de la compañía aseguradora. Adicionalmente, se resalta que no se logra vislumbrar prueba de lo que menciona la parte demandante, pues las imágenes que se muestra corresponden a capturas de un video en donde no se puede precisar el momento exacto en el cual el semáforo de la carrera 100 en sentido Oriente-Norte presuntamente realizó el cambio de color a verde habilitando el paso del motociclista, por ende no son más que apreciaciones subjetivas pero que además las mismas capturas de imágenes del video dan cuenta de que el señor Ávila Castellanos fue quien imprudentemente se encontraba infringiendo las señales de pare, pues no de otra manera se indica que mientras los demás conductores no empezaban la marcha (por atender la luz roja) el citado señor se apresuró a pasar confiando en que no ocurriría el fatal desenlace que hoy da origen a este proceso pero que no es más

Página 4 de 114

que producto del actuar de la propia víctima.

Frente al hecho “10”: A mi representada no le consta lo manifestado en el presente apartado, comoquiera que la misma no presencio lo sucedido. En ese orden de ideas, resulta importante destacar que el Informe Ejecutivo FPJ 3 y el IPAT consigan la hora de la ocurrencia del presunto accidente de manera diferente a la señalada, pues se logra evidenciar que el evento ocurrió presuntamente a las 16:20 horas y 16:35 correspondientemente.

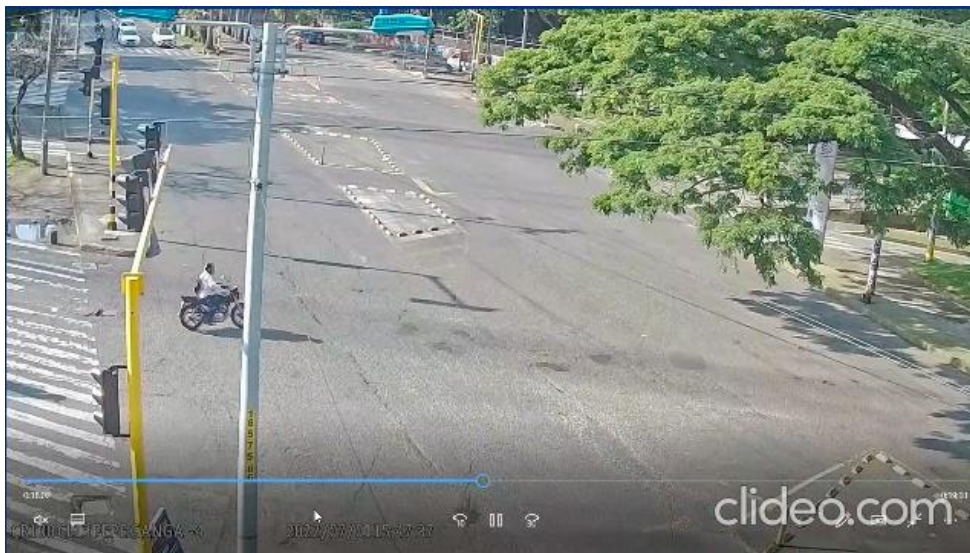
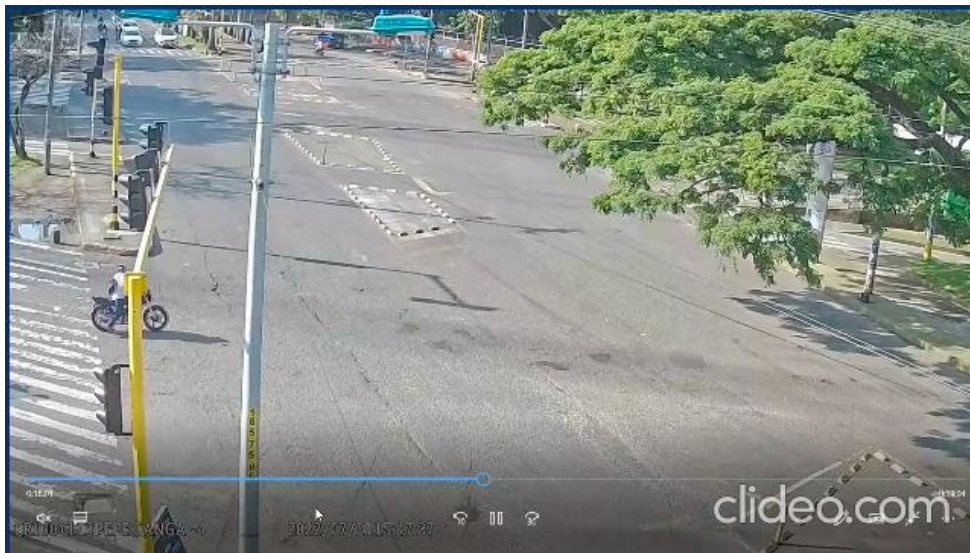
Junto con lo expuesto, resulta necesario resaltar que el escrito a la reforma de la demanda, presenta gran contradicción en hechos anteriores a lo resaltando en el presente apartado, pues se observa en el “hecho 7”, que lo narrado por la activa, refiere que *“aproximadamente a las 16:30 horas Jorge Enrique Avila Castellano (Q.E.P.D.), después de pasar la luz de semáforo en verde”* (negrita propia), contradice lo manifestando en el presente hecho, evidenciando que no hay claridad para los mismos demandantes en la hora y circunstancias de la ocurrencia de los hechos objeto del litigio.

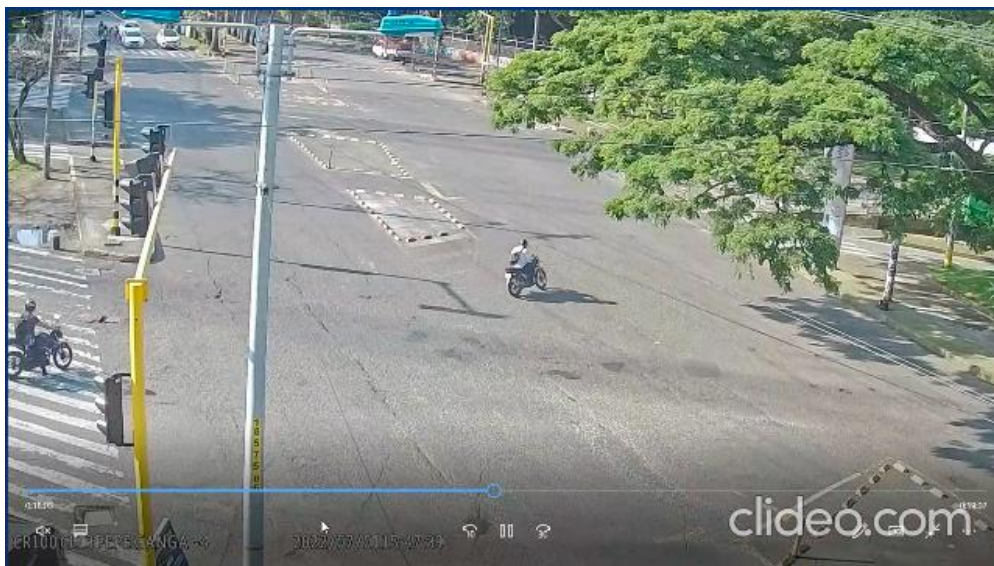
Adicionalmente, en las imágenes aportadas en el escrito genitor, no se logra apreciar que verdaderamente a la hora señalada en el presente hecho, hubiese ocurrido el accidente de tránsito entre los vehículos involucrados, ya que no lo apreciar en primer lugar los vehículos colisionados, segundo la identificación de los mismo, y tercero el color de los semáforos de la zona no se logra apreciar, para dar cuenta cual se encontraba en verde y cual en rojo. Que se pruebe.

Frente al hecho “11”: No es cierto como la parte demandante pretende hacer ver el hecho. De acuerdo al video que aporta manifiesta que a las 15:47:43 todos los carros de la carrera 100 en sentido Occidente-Norte se encuentran pasando el semáforo, de donde extrae que erradamente las 15:47:42 el semáforo estaba en verde. Lo anterior desconoce el mismo video que la parte aporta y que conforme a la redacción de este hecho pretende distorsionar

Página 5 de 114

la realidad porque el motociclista señor Jorge Ávila sobrepasó el semáforo a las 15:47:37 es decir bastantes segundos antes de que se evidencie la circulación de los demás automotores, e incluso se advierte en el video como otro motociclista espera el cambio del semáforo antes de arrancar la marcha, sin embargo para ese momento el señor Ávila ya había infringido la señal de tránsito, veamos:





Nótese como en la última imagen hay un motociclista que aún no ha arrancado la marca porque la luz del semáforo claramente no se lo permitía, sin embargo ya el señor Ávila Castellanos había tomado la fatal decisión de pasar la luz de pare que indicaba el semáforo y terminó exponiéndose a un riesgo que en efecto se terminó materializando pero que en ninguna medida le es atribuible a la parte demandada.

Frente al hecho “12”: A mi representada no le consta lo manifestado en el presente apartado, como quiera que lo manifestado por la activa no hacen parte de conocimiento y funcionamiento de la compañía aseguradora.

Pese a ello, resulta importante destacar, que si bien la secretaría de movilidad expone cuales son los tiempos y las secuencias en el cambio de cada semáforo de la zona, es importante destacar que no hay prueba alguna que para el día 01 de julio del 2022, todos y cada uno de los semáforos de la zona tuvieran dicha numeración y que estuvieran funcionando de buena manera acorde a lo señalado por la activa. Así mismo, resulta necesario reiterar, que la hora en la que presuntamente ocurrió el accidente de tránsito, tiene gran relevancia en el mismo, pues hasta el presente momento hay diferencia de casi

Página 7 de 114

treinta (30) minutos entre lo consignado en el IPAT, el Informe Ejecutivo FPJ 3 y las manifestaciones realizadas por la parte demandante.

Frente al hecho “13”: A mi representada no le consta lo manifestado en el presente apartado, como quiera que lo manifestado por la activa no hacen parte de conocimiento y funcionamiento de la compañía aseguradora. Se resalta que no hay prueba alguna, si quiera sumaria del buen funcionamiento de los semáforos del sector, su presunta numeración y adicionalmente no hay prueba de que los semáforos señalados por la activa, se encontraran en el color que se afirma. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

Frente al hecho “14”: El presente apartado no es un hecho propiamente dicho, resulta claro evidenciar que son meras apreciaciones subjetivas, que se encaminan al beneficio de la activa, pues hasta el momento no se ha podido establecer y acreditar en primer lugar que los semáforos de la calle 13 con carrera 100 para el día 01 de julio del 2020 estuviera funcionando en perfectas condiciones, y en segundo lugar no se ha podido acreditar cual es la hora real de la ocurrencia del presunto accidente de tránsito, ya que la activa ha presentado contradicción en manifestar la hora de la ocurrencia de la colisión, resaltando que los medio probatorios aportados al dossier, dan cuenta de que el accidente de tránsito objeto del presente litigio, ocurrió entre las 16:20 y 16:35 horas.

Frente al hecho “15”: No es cierto como la parte demandante plantea el hecho. Lo anterior en la medida en que aquella realiza una secuencia acomodada a su beneficio desconociendo un elemento primordial y es que se desconoce el momento exacto en que el semáforo que señala como 3B (tránsito del bus) realiza el cambio de color de verde a rojo. Nótese señor juez que para que tenga cabida la descabellada lógica que efectúa el apoderado es necesario conocer con exactitud el momento en que cambia sea el semáforo de la carrera 100 sentido oriente-occidente (tránsito del bus) o el semáforo de la carrera

100 sentido oriente-Norte y desde ese momento exacto empezar a contar el tiempo que presuntamente la alcaldía certificó para el funcionamiento de dichos semáforos. Sin embargo, ese preciso elemento por demás indispensable no se ha probado y no puede probarse a partir de un video en donde no se evidencia el momento exacto del cambio de color y NO puede suponerse que a determinada hora el semáforo 3B había realizado el cambio a verde y que 37 segundos después convenientemente a las 15:47:35 ya debía estar en rojo, pues se resalta FALTA el dato principal y es conocer exactamente la hora en que el semáforo cambió a luz verde para ahí si contar el tiempo en que cambió a rojo. Pero por lo visto, tan elemental supuesto fáctico es desconocido por el apoderado de los demandantes en su afán por construir una teoría que beneficie a sus mandantes.

Frente al hecho “16”: No es cierto como se presenta el hecho, lo anterior porque en las imágenes que se muestran en el hecho no se evidencia ningunos vehículos detenidos que den cuenta de lo que afirma el apoderado de los demandantes. Pero además porque después de la colisión cuando continúan circulando los demás automotores nunca se evidencia que sigan su curso dos vehículos de color blanco, lo que de entrada controvierte lo que aquí se afirma, pues dichos vehículos no se reflejan en el video y no puede entenderse a partir de ese supuesto inexistente que el semáforo presente en el carril del bus de servicio público se encontrara en rojo. Por lo anterior, a pesar de la defensa que pretende desarrollar el apoderado de los demandantes procurando el correcto ejercicio de su mandato sencillamente se queda sin soporte alguno porque lo cierto es que el motociclista fue quien ocasionó el accidente que hoy ocupa la atención del despacho.

Frente al hecho “17”: A mi procurada no le consta lo manifestando en el presente apartado, reiterando que no son más que apreciaciones subjetivas efectuadas por la activa, pues se resalta que no es posible afirmar que el semáforo del carril del bus estuviera en rojo y que el semáforo del carril de la motocicleta estuviera en verde, toda vez que las afirmaciones de la parte demandante se realizan en meras suposiciones y cálculos de tiempo de cambio de color del semáforo sin tener presente la principal variable y es la hora

exacta en que los semáforos cambiaron de color para después contabilizar el periodo de 37 segundos como lo realiza el apoderado. Por ende, es claro que lo mencionado por la parte demandante carece de prueba.

Frente al hechos “18”: No es cierto como se presenta el hecho, claramente se trata de relatar hechos de manera aislada porque claramente al momento preciso del impacto los semáforos ya habrían cambiado la luz que mantenían segundos antes. Aquí se debe resaltar que el hecho determinante es que lastimosamente el señor Jorge Enrique Ávila fue quien de manera apresurada pasó el semáforo en rojo y ello se sustenta en que los demás actores viales que iban sobre dicho carril detuvieron su marcha en incluso un segundo motociclista de manera prevenida levantaba su mirada para percatarse si podía efectuar el paso y muchos segundos después de que la víctima cruzara la calle sin obedecer la luz roja del semáforo se logra evidenciar que los demás actores viales motocicleta y automóviles realizan el paso. Esta situación de entrada deja ver que el motociclista señor Ávila Castellanos sin duda se apresuró para cruzar la calle confiando en que no ocurriría el lamentable suceso, pero que en efecto dicha desatención fue lo que ocasionó su propia muerte.

Frente al hecho “19”: A mi poderdante no le consta lo manifestando en el presente apartado, comoquiera que tener conocimiento sobre el funcionamiento y ubicación de los semáforos de las ciudades, sobrepasa los límites de su funcionamiento de la compañía aseguradora, tampoco le consta que a dichos semáforos le corresponda la numeración que aquí se expone.

Frente al hecho “20”: A mi procurada no le consta de manera directa lo expuesto por la activa, como quiera que no presencié lo ocurrido, y ninguno de sus procurados era conductor del vehículo presuntamente involucrado en el accidente de tránsito. Pese a ello, en el IPAT se logra observar que el lugar de impacto para el vehículo de placa VCS-574 es el bómper delantero derecho, lo que a todas luces es evidente que existió una conducta

imprudente por parte del señor Enrique Ávila (Q.E.P.D.), quien conducía la motocicleta de placa KZE-12D, y quien no obedeció la luz roja del semáforo lo que nos permite inferir que el actuar del hoy fallecido, llevó a que se configurara el accidente de tránsito.

Frente a hecho “21”: El presente apartado presente varias afirmaciones ante las cuales me pronuncio así:

- Es cierto, según se observa en el IPAT que la motocicleta de placa KZE-12D fue impactada en la parte trasera, esto debido al imprudente comportamiento que el señor Enrique Ávila (Q.E.P.D.), efectuó al realizar la maniobra imprudente y prohibida de pasarse el semáforo en rojo, y adicionando que ejecuto la acción de adelantar por la derecha, causal que le fue atribuida según lo expuesto en el Informe Policial de Accidente de Tránsito.
- Frente a a la distancia a la que quedó la motocicleta después de la colisión a mi procurada, pues la misma no presencio de manera directa lo manifestado por la activa, y adicionalmente no hay prueba siquiera sumaria que pruebe lo dicho, pues es claro que, al no estar probadas dichas manifestaciones, resultan ser simples exposiciones subjetiva que se encaminan al beneficio de los demandantes. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

Frente al hecho “22”: El presente apartado presenta varias manifestaciones, ante las cuales me pronuncio así:

- Es cierto, según el IPAT que las condiciones de la vía y climáticas eran buenas.
- Respecto del funcionamiento de los semáforos, no le conta a mi procurada, pues dicha información es ajena al funcionamiento de la compañía aseguradora, y no hay

Página **11** de **114**

prueba del buen estado de los mismos. Que se pruebe.

Frente al hecho “23”: A mi procurada no le consta lo expuesto en el presente apartado, comoquiera que la misma ni presencio de manera directa lo sucedido, y ninguno de sus delegados era el conductor del vehículo señalado. Adicionalmente, no hay prueba siquiera sumaria, que permita de manera fehaciente establecer que el vehículo de placa VCS-574 se movilizaba a la velocidad señalada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

Frente al hecho “24”: No es cierto, no existe en el plenario prueba alguna que permita hacer tal afirmación, la parte demandante a partir de meros supuestos y conjeturas pretende hacer creer que el semáforo del carril por el que se movilizaba el autobús se encontraba en rojo. Sin embargo, del mismo video que él apodera se evidencia la conducta imprudente del motociclista quien emprende su movilización cuando el semáforo aun no lo permitía y ello deviene de la conducta que se observa de los demás actores viales quienes arrancan el transito muchos segundos después que el motociclista. Pero además, es pertinente reiterar que al vehículo tipo motocicleta de placa KZE-12D, se le endilgo la causal 142 *semáforo en rojo*, situación que denota a todas luces que el señor Enrique Ávila (Q.E.P.D.), tuvo injerencia y participación en la ocurrencia del presunto accidente de tránsito, objeto del litigio y por lo tanto no es posible imputar ninguna responsabilidad a cargo de la parte pasiva de la litis.

Frente al hecho “25”: No es cierto que la causa eficiente del daño padecido por el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) sea en modo alguno imputable al conductor del vehículo de placa VCS-574, comoquiera que tal como consta en la siguiente imagen tomada del Informe Policial de Accidente de Tránsito, es claro que no fue posible establecer la hipótesis del accidente que nos convoca en este trámite en cabeza de tal conductor:

10. TOTAL VICTIMAS		PEATÓN	ACOMPANANTE	PASAJERO	CONDUCTOR	TOTAL HERIDOS	MUERTOS
11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO							
DEL CONDUCTOR		101	142	DEL VEHÍCULO		DEL PEATÓN	
DE LA VÍA		102	142	DE LA VÍA		DE PASAJERO	
OTRA		ESPECIFICAR ¿CUAL?					
12. TESTIGOS							
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO	
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO	
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO	
13. OBSERVACIONES							
Hipotesis 142 Semáforo o luz Roja para uno de los Conductores							
14. ANEXOS							
ANEXO 1 Conductores, Vehículos		ANEXO 2 Víctimas, Peatones o Pasajeros		OTROS ANEXOS (FOTOS Y VIDEOS)			

Luego, es claro que las improbadas e hipotéticas imputaciones de responsabilidad que pretende la parte demandante se basan en interpretaciones subjetivas sin asidero probatorio alguno, las cuales únicamente pretenden desdibujar ante el Despacho que el conductor del vehículo de placa antes referida no fue el causante del accidente de tránsito respecto al cual se erige este proceso y adicionalmente, en un intento por confundir a esta Judicatura el extremo actor refiere cálculos sobre los tiempos en que los semáforos cambian de color desconociendo el factor principal para efectuar dicho conteo y es el omento exacto del cambio de color de aquellos, además no existe una sola prueba que dé cuenta de un exceso de velocidad imputable al conductor del bus, tampoco de un mal uso del carril, mucho menos de no estar atento a los demás conductores, tampoco que el conductor haya conducido con impericia pues aquí el conductor ejercía la conducción debidamente autorizado y contando con la respectiva licencia C2 que así lo avala, tampoco se acredita que no conservara la distancia de seguridad y en todo caso aquella manifestación no tiene injerencia alguna con la modalidad de colisión que aquí se presenta y finalmente se itera que ninguna prueba da cuenta del presunto paso mientras el semáforo estaba en rojo. Por lo visto, valiéndose de cualquier afirmación indiscriminada la parte demandante pretende imputar una inexistente responsabilidad, cuando es claro que el hecho ocurrió como producto del actuar imprudente del señor Jorge Enrique Ávila.

Frente al hecho “26”: A mi procurada no le consta en forma directa el contenido de este hecho como quiera que la misma no tuvo intervención o injerencia alguna en el traslado ni diagnóstico médico del señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.), que se pruebe.

Frente al hecho “27”: A mi procurada no le consta de forma directa este hecho pues no tuvo intervención o injerencia en la atención clínica brindada al señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.).

Frente al hecho “28”: Es cierto como consta en el Informe Pericial de Necropsia.

Frente al hecho “29”: Es cierto que el vehículo de placa VCS-574 es propiedad de la sociedad Bancolombia S.A., tal como consta en consulta realizada en el Registro Único Nacional de Tránsito.

Frente al hecho “30”: A mi procurada no le consta de forma directa esta afirmación. Que se pruebe.

Frente al hecho “31”: Es cierto, como se acredita con el Informe Policial de Accidente de Tránsito adosado al plenario.

Frente al hecho “32”: Sólo es cierto en el sentido de que para el momento de ocurrencia del accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022 el vehículo de placa VCS-574 contaba con póliza que amparaba, entre otros, la responsabilidad civil extracontractual derivada de la conducción de dicho automotor. No obstante, debe ser claro para el Despacho que la existencia de un contrato de seguros no implica per se la obligación indemnizatoria en cabeza de mi representada. Lo anterior, toda vez que se debe cumplir en primer lugar, con la acreditación del hecho dañino en cabeza del asegurado, elemento este que no se encuentra acreditado al interior del presente trámite. En segundo lugar, que se encuentren agotados los presupuestos de la modalidad de la póliza otorgada por mi

Página 14 de 114

procurada, es decir, que los hechos hubieran ocurrido durante la vigencia de la póliza, y, en tercer lugar, que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro.

Frente al hecho “33”: Respecto a este hecho lo primero sea señalar que el texto de la demanda es ambiguo por cuanto no refiere de forma clara quien es el presunto “agente dañino” ello en consideración a que la hipótesis del IPAT no determina de forma precisa a cual de los conductores es atribuible la misma, sin embargo, dotando de una lectura integral el texto de la demanda no es cierto que el conductor del vehículo de placa VCS-574 hubiese frustrado los derechos y actividades de convivencia de los demandantes, pues ciertamente, no obra al interior del expediente elementos que permitan determinar que el mismo fue el responsable de la comisión del accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022, siendo en todo caso necesario señalar que no obra al interior del expediente prueba siquiera sumaria que permita dar cuenta de este presunto perjuicio.

Frente al hecho “34”: Respecto a este hecho lo primero sea señalar que el texto de la demanda es ambiguo por cuanto no refiere de forma clara quien es el presunto “agente dañino” ello en consideración a que la hipótesis del IPAT no determina de forma precisa a cuál de los conductores es atribuible la misma, sin embargo, dotando de una lectura integral el texto de la demanda no es cierto que el conductor del vehículo de placa VCS-574 hubiese causado algún tipo de perjuicio emocional o moral a los demandantes, pues el mismo no fue el responsable del accidente de tránsito respecto al cual se erige este trámite y en todo caso, no obran pruebas que permitan dar cuenta de la existencia de este referido daño o perjuicio. Que se pruebe.

Frente al hecho “35”: A mi procurada no le consta de forma directa lo afirmado por los demandantes, no obstante, por parte de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., no se ha efectuado pago alguno con cargo a la póliza.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES

FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión comoquiera que la parte demandante incurre en un error técnico jurídico al solicitar que se declare civilmente y solidariamente responsable a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., por los perjuicios, presuntamente ocasionados a la parte demandante, evadiendo el hecho de que mi prohijada no tuvo injerencia o participación alguna en el accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022. Resulta pertinente recordar que la responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad entre ambos, sin embargo, mi representada no era la propietaria del vehículo de VCS-574, tampoco un dependiente suyo era quien lo conducía, ni era la empresa a la que estaba afiliado dicho vehículo no le es atribuible la responsabilidad por el daño presuntamente irrigado.

Así pues, mi procurada no tenía relación alguna con tal vehículo, más allá del existente en virtud del contrato de seguro con base en el cual se le demanda. Siendo en todo caso necesario señalar que la misma tampoco ostenta ningún tipo de relación con las demás demandadas a partir de la cual se hubiere pactado la solidaridad convencional. Por consiguiente, mi representada no puede ser condenada en forma alguna como responsable solidaria por los perjuicios que se derivaran por la ocurrencia del accidente ocurrido el 1 de julio de 2022.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.2. CONDENA DIRECTA A LA ASEGURADORA: Me opongo a la declaratoria de cualquier tipo de condena en contra de mi procurada comoquiera que la activa de la acción no ha cumplido con las cargas procesales impuestas a partir del artículo 1077 del Código de Comercio, como lo son acreditación de la ocurrencia del riesgo asegurado y cuantía del la pérdida, ni se ha aportado elementos que permitan acreditar la existencia de una responsabilidad civil como la pretendida, a saber, hecho, daño

Página 16 de 114

y nexo de causalidad.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.3. CONDENAR A PAGAR A TODOS LOS DEMANDADOS LOS SIGUIENTES RUBROS: Me opongo a esta pretensión como quiera que la parte actora se limita a solicitar sendas sumas de dinero sin acreditar la estructuración de una responsabilidad y unos perjuicios como los pretendidos. Sin perjuicio de ello, me pronunció de forma separada respecto a cada tipología de perjuicios solicitada de la siguiente forma:

FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.3.1. LUCRO CESANTE: Me opongo al reconocimiento de este perjuicio en favor de la demandante, comoquiera que la materialización del mismo requiere que se haya ocasionado una pérdida o desventura económica cierta, no obstante, no obra al interior del expediente prueba siquiera sumaria que permita dar cuenta de que el señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.), percibía algún tipo de rédito o emolumento económico por el desarrollo de alguna actividad laboral que el mismo se encontrara desarrollando. Al respecto, no huelga advertir que, de conformidad con el registro civil de nacimiento adosado al plenario, el referido señor tenía la edad de 69 años para el momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, por lo que, a la fecha de su fallecimiento, el mismo se encontraba pensionado, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1996, y tal como lo evidencia la consulta en la página pública del RUAF. Por lo que no le es aplicable la presunción de que cada persona en edad productiva devenga por lo menos un salario mínimo.

Adicionalmente, es necesario advertir que no obra al interior del expediente prueba siquiera sumaria que permita acreditar que la señora María Rubiela Grijalba dependiera económicamente del señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.) y en todo caso, de conformidad con consulta realizada en el Registro Único de Afiliados – RUAF, desde el 05 de septiembre de 2022 mediante resolución No. 240952 la demandante es beneficiaria de una pensión de sobrevivencia vitalicia por parte de Colpensiones, siendo claro como la misma no se ha

Página 17 de 114

visto afectada o mermada económicamente como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 01 de julio de 2022, es totalmente improcedente el reconocimiento de una indemnización por este concepto.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.3.2. PERJUICIOS MORALES:

5.3.3. PERJUICIOS MORALES: Me opongo al reconocimiento del valor pretendido por concepto de daño moral, el cual equivale a la suma de \$116.000.000 para cada uno de los demandantes, pues dicho valores son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que superan el baremo jurisprudencial de antaño decantado por el Órgano de Cierre en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil. Puesto que, siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por el alto Tribunal para la tasación de los perjuicios morales en casos análogos de muerte, se ha fijado sumas muy inferiores a las aquí pretendidas.

Sin perjuicio de lo referido en atención, es necesario señalar que en todo caso la póliza mediante la cual se vincula a mi procurada al presente trámite no brinda cobertura en relación con los mismos. Al respecto es necesario advertir que, tal como consta en la siguiente imagen de la cláusula 2.1.19. del condicionado aplicable, se acordó que la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, no brindaría cobertura respecto a esta tipología de perjuicios en favor de las víctimas en ninguna forma, luego, al no encontrarse contenida en la misma una cobertura en este sentido no es dable el reconocimiento de suma alguna por este perjuicio.

2.1.19. Los derivados de la pérdida de beneficios y los perjuicios morales del asegurado y de las víctimas en ninguna forma.

Oposición al daño moral iure hereditatis: es totalmente improcedentes, porque no está demostrado que el señor después del accidente haya tenido conciencia o capacidad de sentir dolor y que en todo caso el señor Enrique Ávila (Q.E.P.D.) murió al siguiente del presunto accidente de tránsito, por lo que es improcedentes la suma solicitada ante un daño que primero no está fehacientemente probado y en segundo lugar no fue prolongado, destacando que el mismo fallecido fue el que causado su propia afectación, como consecuencia del actuar imprudente y carente de pericia al momento de ejecutar la acción de conducir, y pasar el semáforo en rojo.

5.3.4. PERJUICIO A LA VIDA EN RELACIÓN: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión por concepto de “daño a la vida en relación”, que se tasó por la suma equivalente a \$116.000.000 para cada uno de los demandantes. Es preciso resaltar que este tipo de perjuicios **se reconoce única y exclusivamente a la víctima directa**, dicha tasación económica es carente de fundamento y no debe ser considerada. La parte demandante pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no sería procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de su acreditación, y pese a ello, en todo caso, el reconocimiento invocado es superior a los casos de similitudes circunstancias de que nos ocupa, que en diferentes postulados la H. Corte Suprema ha reconocido. Por otro lado, este concepto debe basarse en afirmaciones concretas que den muestra de cuáles son las afectaciones reales que ha sufrido las víctimas en sus condiciones de vida.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario destacar que la suma pretendida es abiertamente desproporcionada, y contraría los parámetros establecidos por la H. Corte Suprema de Justicia, dado que la mentada Corporación en Sentencia SC5686-2018, resolvió el daño a la vida de relación en la suma equivalente a \$50.000.000, con ocasión a

Página 19 de 114

la muerte de un pariente.

Corolario de lo anterior, no resulta aceptable que en el hecho que motivó la controversia y que resulta mucho menos gravoso para el demandante y por tanto es excesiva y desbordada.

Oposición al daño a la vida de relación iure hereditatis: resulta necesario exponer que este tipo de tipologías de perjuicio, analiza las cargas o dificultades a las que se encuentra sometida la persona como consecuencia de un hecho dañoso. En el caso que nos convoca, resulta propio reiterar que la víctima falleció, se toma como improcedente este tipo de reconocimiento indemnizatorio, máxime cuando la muerte del señor Ávila fue al día siguiente del accidente de tránsito, y por tanto es evidente que la víctima directa no pudo sentir o percibir las cargas, afectaciones e impedimentos para ejercer las actividades rutinarias.

5.3.5. DAÑO A LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD: Me opongo al reconocimiento de este perjuicio en favor de los demandantes, como quiera que adicionalmente a que no se hayan estructurados los elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual, y en todo caso no existe daño que dé lugar a indemnización bajo este concepto, ya que no existe ningún tipo de oportunidad cierta que se haya perdido con ocasión al accidente del 01 de julio de 2022. No se avizora el grado de probabilidad razonable que infiera que las víctimas perdieron la oportunidad, como quiera que no se acredita la certeza de este rubro.

En el mismo sentido, y tal suerte correo el perjuicio en la modalidad hereditatis, toda vez que no existe prueba que de cuenta de la frustración de una ganancia o expectativa de ganar u obtener algún beneficio o ventaja para el señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.), y bajo esa consideración, es más que claro que no se pueden hacer afirmaciones en meras especulaciones, sino que todo lo contrario se debe partir del carácter cierto del perjuicio.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.4. INTERESES DE MORA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, habida cuenta que desde la conciliación extrajudicial, la radicación de la demanda o la notificación a mi mandante no se ha probado el siniestro, es decir la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida. Lo cierto es que en este caso aun no se ha logrado probar la responsabilidad civil extracontractual en cabeza del conductor del vehículo asegurado y mucho menos el quantum de la indemnización que se persigue. Por ende como aquellos elementos no se han acreditado es imposible exigir los intereses de que trata el artículo 1080 del C.Co. pues solo con la sentencia se tendrá certeza de la existencia de aquellos elementos. Pero como se ha advertido en este caso operó el hecho de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad por lo que el despacho no podrá imponer condena alguna a mi mandante ni a los demás sujetos que integran la parte pasiva de la litis.

Condena de intereses moratorios a todos los demandados: Me opongo al reconocimiento de esta pretensión como quiera que al no haberse acreditado la existencia de responsabilidad en la pasiva de la acción no es procedente la imputación de obligación de pago alguna en favor de los demandantes que pudiera ser objeto de intereses, ni tampoco de los presentes llamados en garantía.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.5. COSTAS Y EN AGENCIAS EN DERECHO: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión y, por el contrario, solicito de manera respetuosa al despacho que condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.6. INDEXACIÓN: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, habida cuenta que al no estar acreditados los elementos que configuran responsabilidad civil como la pretendida, no existe obligación alguna que se encuentre a cargo de mi representada que pueda ser objeto de indexación y/o actualización.

III. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO DE LA DEMANDA

Frente al Juramento Estimatorio, mismo que se encuentra señalado en el Art. 206 del C.G.P., presento mi oposición al mismo, pues bien, se ha venido reiterando que la demanda carece de sustento jurídico y probatorio que de alguna manera permita probar la responsabilidad civil reclamada. Adicionalmente, no sólo no se encuentra acreditada la responsabilidad que pretende endilgarse a los demandados, sino que no existe prueba del perjuicio alegado, ni referencia clara y expresa del ejercicio matemático de cuantificación efectuado para la obtención del mismo.

En este sentido lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia, que:

*“(...) No sobra indicar que la valoración del **juramento estimativo debe sujetarse a las reglas de apreciación del mismo**, en virtud de las cuales, **no basta con las afirmaciones del demandante, pues es menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de manera razonada**, y de otra, que de conformidad con la sustancialidad de las formas debe mediar un principio de acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él (...) Luego, **si no se tiene prueba del daño, pues el juramento estimatorio a lo sumo constituye —de ser razonable— prueba de su cuantía**, no se puede reconocer indemnización en los términos reclamados por el recurrente, como ocurre en el presente asunto (...)”¹ (Negritas fuera del texto original).*

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del Código General del Proceso y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables

¹ Corte Suprema De Justicia, Sentencia SP1796-2018/51390 de mayo 23 de 2018. M.P. Dr. Ángel Guillermo Salazar Otero.

y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el juramento estimatorio de la demanda en los siguientes términos:

Como aspecto fundamental para objetar el juramento estimatorio frente al lucro cesante, debe advertirse que no hay prueba alguna que acredite fehacientemente que (i) el señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.) efectivamente hubiera tenido algún tipo de vinculación laboral, ni mucho pruebas de sus ingresos económicos, para la fecha de los hechos objeto del presente litigio. (ii) No se puede desconocer que el sistema RUAF informa que el hoy fallecido era pensionado (iii) Así mismo se corrobora que la señora María Rubiela Grijalba, recibe una pensión de sobrevivientes como consecuencia del deceso del señor Ávila, (iv) aun en gracia de discusión tampoco se ha probado la dependencia económica de la señora Rubiela respecto al fallecido y (v) consecuentemente la pensión que hoy recibe la señora Rubiela sustituye en todo los presuntos ingresos que hubiere podido devengar del señor Ávila, lo que deja ver que no se ha presentado afectación en su ingreso económico.

De tal suerte, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, es en todo caso excesivo y sin soporte probatorio, de manera amable solicito a usted señor Juez, no tener en cuenta la estimación que se realiza en el libelo genitor.

IV. EXCEPCIONES FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en tres (3) grupos. En primer lugar, se abordarán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión a los hechos del 01 de julio del 2022, en segundo lugar, en relación con las pretensiones indemnizatorias invocadas en la demanda, y finalmente las relacionadas con el contrato de seguro, se formularán las siguientes excepciones:

Página **23** de **114**

EXCEPCIONES FRENTE AL FONDO DEL ASUNTO

1. NO SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE SE PRETENDE ENDILGAR AL DEMANDADO POR AUSENCIA DE NEXO CAUSAL

La parte demandante no acreditó que el accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022, hubiere devenido de la responsabilidad del conductor del vehículo de placa VCS-574, pues en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que da cuenta de las condiciones tiempo espaciales de la ocurrencia de un accidente, se señala que la hipótesis del accidente no pudo ser atribuida a ninguno de los conductores. Sin que, en todo caso, la información de tal documento pueda ser tenida como una declaratoria de responsabilidad.

Uno de los elementos indispensables para declarar la existencia de responsabilidad civil extracontractual, es la acreditación de la ocurrencia de hecho dañoso. Este elemento debe demostrarse de forma clara y fehaciente, pues es la base sobre la cual se cimienta la obligación indemnizatoria. En materia de accidentes de tránsito, el Informe Policial de Accidente de Tránsito es la prueba determinante de su ocurrencia y de las condiciones de tiempo, lugar y vehículos involucrados. Efectivamente, cuando ocurre un accidente se levanta un informe con el fin de esclarecer los hechos y dejar constancia de lo sucedido. Por ello, se considera a dicho informe como un elemento de juicio que permite realizar un análisis del esquema fáctico debido a que precisa las causas del impacto, la identificación de los involucrados, lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho, estado de la vía, huella de frenado, grado de visibilidad, colocación del vehículo, descripción de los daños y lesiones, testigos presenciales, entre otros². Sobre la importancia de acreditar el accidente de tránsito, la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente:

² L. 769/2002, art. 149.

*Era indispensable, en consecuencia, escrutar, a través del acervo probatorio practicado y recaudado, (i) la descripción del lugar de la colisión (vgr. la anchura o uniformidad de la vía, topografía y señales de tránsito del sector circundante antes y después del punto de colisión, el estado del tramo vial); (ii) los factores de importancia en el iter del choque (hora, condiciones atmosféricas, características del flujo vial al momento del impacto, campo de visibilidad, la ubicación de los vehículos luego del suceso, así como su examen mecánico, entre ellos, las señales acústicas y luminosas, las condiciones de los neumáticos, huellas de frenado, detritus de vidrios, fango o barniz desprendidos de los automotores por efectos de la colisión); (iii) **los aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados** (averiguado mediante las versiones de éstos o mediante testigos presenciales del hecho); y (iv) **las conclusiones sobre las comprobaciones fácticas acerca de las razones que provocaron el accidente.** ³(negrita fuera del texto original)*

De tal suerte, la declaratoria de Responsabilidad Civil Extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. De esa manera, el reclamante en acción extracontractual deberá enlazar su causa y labor demostrativa a **“aducir la prueba de los factores constitutivos de responsabilidad extracontractual, como son, el perjuicio, la culpa y la relación de causalidad o dependencia que lógicamente debe existir entre los dos primeros elementos enunciados, estando desde luego el demandado en posibilidad de exonerarse de la obligación de que se trata si demuestra un hecho exonerativo de responsabilidad”** (CSJ SC del 9 de feb. de 1976). (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Lo anterior, se traduce en que la parte que solicita la indemnización de un perjuicio, no debe

³ CSJ, Cas. Civil, Sent. Radicación 73001-31-03-001-2014-00034-01, sep. 20/2019, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
Página 25 de 114

conformarse con acreditar la ocurrencia del hecho y del daño que presuntamente reportó con ocasión al accidente, correspondiendo a la parte demandante acreditar la culpa y el nexo causal en las acciones desarrolladas por su contraparte. A su vez, existe consenso en la Jurisprudencia y la Doctrina en cuanto a que, la Responsabilidad Civil Extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. Siendo así, la Corte Suprema de Justicia ha determinado los presupuestos para la viabilidad de la acción de reparación por Responsabilidad Civil Extracontractual, saber “a) la comisión de un hecho dañino, b) la culpa del sujeto agente y c) la existencia de la relación de causalidad entre uno y otra”⁴

Ahora bien, la parte actora fundamenta todas las valoraciones de culpa en el Informe de Tránsito del accidente del 01 de julio de 2022, con base en ocho hipótesis de responsabilidad que no se encuentran contenidas en tal documento, de tal suerte, las misma no pueden ser tenidas en consideración, sin perjuicio de ello, es necesario advertir que en todo caso tal documento ni siquiera refiere que la responsabilidad en la ocurrencia del accidente de tránsito hubiera devenido del proceso de conducción del vehículo de placa VCS-574. Al respecto, es necesario poner de presente que este documento carece del valor probatorio que le ha otorgado la parte actora, pues de ninguna manera puede valer como un dictamen de responsabilidad de responsabilidad.

Igualmente, es importante reseñar que **el informe policial no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad**, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 03 de diciembre de 2018. Radicación n° 2006-00497-01. M.P. Margarita Cabello Blanco.

Artículo 149: *El informe contendrá por lo menos:*

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.

[...]

Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes. (negrita fuera del texto original).

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de la norma:

Página 27 de 114

ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO. *Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.*

De los anteriores artículos, se deduce necesariamente, que **el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis,** pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad.

En contraste con lo expuesto, en el caso que nos ocupa, se tiene que la parte actora pretende que se declare la existencia de responsabilidad civil en cabeza de la parte pasiva de la acción, debido a los supuestos perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido 01 de julio de 2022 de conformidad con el Informe Policial de Accidente de Tránsito, cuando ni siquiera tal documento refiere que la conducta del conductor del vehículo de placa VCS-574 hubiere sido la causa efectiva del accidente de tránsito respecto al cual se cimienta este trámite. Así pues, es claro que al interior de este trámite no se haya acreditado el nexo de causalidad, toda vez que no obra al interior del plenario ninguna prueba que permita evidenciar que el accidente de tránsito fue ocasionado por el conductor del vehículo de placa VCS-574.

Adicionalmente, el artículo 167 del Código General del Proceso, determinó que es deber de las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que

Página 28 de 114

ellas persiguen. Siendo claro como el incumplimiento de tal carga procesal consecuentemente deviene en el fracaso de sus pretensiones, no siendo de recibo que el extremo actor pretenda la prosperidad de sus pretensiones con asiento en su exclusivo dicho.

Por otro lado, es preciso advertir que mi procurada no puede ser asemejada en forma alguna al asegurado o al conductor del vehículo asegurado, comoquiera que la obligación de pago, indemnización y/o reembolso se encuentra sujeta a la condición de que se declare, mediante sentencia ejecutoriada, la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado o del asegurado. En consecuencia, los fundamentos probatorios que soportan los hechos de la demanda carecen de elementos necesarios, indispensables e indivisibles de la prueba. De este modo, la presente acción carece de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del accidente recae en cabeza del asegurado.

En conclusión, es claro que al interior del presente trámite no existe prueba alguna de que el fallecimiento del señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.) hayan devenido en forma alguna del proceso de conducción del vehículo de placa VCS-574, como quiera que el Informe Policial de Accidente Tránsito no refiere nada al respecto de tal particular ya que no fue posible determinar de forma clara cuál de los dos conductores presuntamente no respetó la señal semafórica roja, por tanto, al ser clara la ausencia de acreditación de los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual que se pretende endilgar a la pasiva consecuentemente las pretensiones de la demanda se encuentran abocadas a su fracaso.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

2. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN EN ATENCIÓN A LA CONCURRENCIA DE CAUSAS

Página 29 de 114

Esta excepción se propone sin perjuicio de la anterior y *subsidiariamente*, toda vez que de conformidad con las circunstancias fácticas respecto a las cuales ocurrió el accidente de tránsito acaecido el 01 de julio de 2022 la parte demandante desconoce que, tanto el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) como el señor Héctor Fabio Mora Rivera ostentaban la calidad de conductores. Encontrándose ambos en el deber de estar atentos de la vía y las actuaciones de los demás actores a fin de evitar la materialización de hechos como el que nos convoca a este trámite. Es decir, en el hipotético caso en que se declare la existencia de responsabilidad, la eventual indemnización deberá disminuirse en proporción a la participación del demandante en el suceso, esto es, como mínimo en un 50%.

A partir de la Jurisprudencia de las altas Cortes, para el análisis de este tipo de eventos en los que puede llegar a existir concurrencia de culpas en el ejercicio de actividades peligrosas, corresponderá al Juez examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el supuesto daño, con el fin de evaluar la equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes y su incidencia en la cadena de causas generadoras del daño; estableciendo de ese modo, el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los involucrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 2357 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ARTÍCULO 2357. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. *La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.*” (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Ahora bien, cuando el daño es consecuencia de la convergencia de roles riesgosos realizados por la víctima y el agente, el análisis de la contribución de cada uno de los involucrados en la producción del hecho, no debe ser desmesurado ni subjetivo, pues es fundamental establecer la circunstancia incidental que corresponde en este caso.

Página 30 de 114

Ha retomado entonces la Corte Suprema de Justicia⁵ la tesis de la intervención causal, consistente en que la graduación de culpas cuando se está en presencia de actividades peligrosas concurrentes, impone al juzgador el deber de examinar a plenitud las conductas desplegadas por las partes involucradas, para precisar la incidencia en el daño, y consecuentemente, determinar la responsabilidad de uno y otro.

“Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (...)”⁶

Así entonces, cuando la causa del daño corresponde a una actividad que se halla en la exclusiva esfera de riesgo de alguno de los sujetos, habría un único responsable; sin embargo, distinto es, cuando concurren ambas actividades peligrosas como causa del daño, determinando la contribución de los involucrados, que implica atenuar el deber de repararlo.

Consecuentemente en el hipotético, remoto y eventual escenario en que esta Judicatura encuentre acreditada la responsabilidad de la pasiva de la acción, deberá seguidamente

⁵ Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de junio de 2018, Radicado: 11001-31-03-032-2011-00736-01.

⁶ Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 24 de agosto de 2009, Radicado: 2001-01054-01; igualmente reiterado en sentencias del 26 de agosto de 2010, Radicado: 2005-00611-01, y del 16 de diciembre de 2010, Radicado: 1989-000042-01.

reducirse el eventual valor indemnizatorio en atención al porcentaje de participación que el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) tuvo en la producción del hecho lesivo.

Solicito se declare probada esta excepción.

EXCEPCIONES FRENTE A LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS INVOCADAS **EN LA DEMANDA**

3. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LOS DEMANDANTES

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de la demandante, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues en la demanda se solicitan \$116.000.000 para cada uno de los demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido.

Resulta pertinente recordar que, con relación a la ponderación de los daños morales que pretende la parte actora, si bien la misma se encuentra deferida al recto criterio del fallador, estas deben ser debidamente acreditadas, demostradas y tasadas por quien las pretende, teniendo en cuenta además que, este tipo de perjuicios *“se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o*

*inmaterial resultan inasibles e incommensurables*⁷. Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que el mismo no “*constituye un «regalo u obsequio»*” por el contrario, se encuentra encaminado a “*reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares*”⁸, con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa. Sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia⁹.

Inicialmente, se debe advertir al despacho que existe una desmesurada solicitud de perjuicios morales por valor de \$ 116.000.000 para cada uno de los demandantes, lo cual es a todas luces improcedente, puesto que refleja un evidente ánimo especulativo y una errónea tasación de los perjuicios, en tanto que los mismos resultan exorbitantes según los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia. En efecto, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada y en tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que no han sido reconocidos en casos excepcionales como la muerte.

Se advierte que, de conformidad con las pretensiones de la demanda, se solicitan las siguientes sumas de dinero:

⁷ Sentencia de casación civil del 13 de mayo de 2008, Exp.1997-09327-01.

⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004-032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona)

⁹ Ídem.

Para María Rubiela Grijalba (compañera de la víctima): \$116.000.000

Para Ana Rocío Ávila Grijalba (hija de la víctima): \$116.000.000

Diana Patricia Ávila Grijalba (hija de la víctima): \$116.000.000

Doris Eugenia Ávila (hermana de la víctima): \$116.000.000

Fernando Ávila (hermano de la víctima): \$116.000.000

Gloria Stella Ávila (hermana de la víctima): \$116.000.000

Juan Pablo Ramírez (nieto de la víctima): \$116.000.000

Arhiani Valencia (nieta de la víctima): \$116.000.000

Para ilustrar de forma puntual la manera en que la Corte Suprema de Justicia ha cuantificado este perjuicio, es preciso traer a colación un caso particular. Así pues, en sentencia del SC4703 del 22 de octubre del 2021, la Sala Civil de la Corte analizó el caso de un hombre que falleció en un accidente aéreo. En esta ocasión, la Corte reconoció por concepto de daño moral el monto de cuarenta y siete millones, cuatrocientos setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos (\$ 47.472.181), para la cónyuge e hijos.

Por tanto, es claro el ánimo e intención de lucro de la parte demandante al pretender el reconocimiento de un perjuicio moral sobre \$ 116.000.000, para cada uno de los demandantes, cuando en casos similares al que nos ocupa la Corte Suprema de Justicia ha reconocido cifras mucho menores. En virtud de lo anterior, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

Frente al daño moral iure hereditatis, es apenas necesario exponer que es totalmente improcedentes, porque no está demostrado que el señor después del accidente haya tenido conciencia o capacidad de sentir dolor y que en todo caso el señor Enrique Ávila (Q.E.P.D.) murió al siguiente del presunto accidente de tránsito, por lo que es improcedentes la suma solicitada ante un daño que primero no está fehacientemente probado y en segundo lugar no fue prolongado, destacando que el mismo fallecido fue el que causado su propia

afectación, como consecuencia del actuar imprudente y carente de pericia al momento de ejecutar la acción de conducir, y pasar el semáforo en rojo.

En atención a los argumentos expuestos, la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales en cabeza de la demandante se encuentra totalmente alejada de los criterios normativos y jurisprudenciales que se han sostenido durante años. Lo anterior, al no encontrarse acreditado, en primer lugar, la responsabilidad en cabeza de los demandados y, en segundo lugar, de forma clara y fehaciente los valores pretendidos, ya que sólo se estipulan unos rubros sin indicación de su procedencia. La doctrina ha establecido, en relación a la naturaleza demostrable de los perjuicios morales, lo siguiente:

*“(...) Los perjuicios morales subjetivados, igual que los materiales, deben aparecer demostrados procesalmente. Si bien su cuantificación económica es imposible, dada la naturaleza misma del daño, **lo cierto es que su intensidad es perfectamente demostrable**. La medicina y la psiquiatría contemporáneas pueden dictaminar casi con exactitud el grado y duración del dolor físico y psíquico (...)”¹⁰.*
(Negritas fuera del texto original).

En conclusión, es claro que la parte demandante, con la solicitud de reconocimiento de este perjuicio, no acredita con ningún medio de prueba los requisitos mínimos necesarios para que sea reconocido este concepto indemnizatorio, toda vez que no hay congruencia entre lo pretendido, lo que pretende probar la parte demandante y los lineamientos que al respecto ha emitido la Sala Civil de la Corte. Además, la parte demandante solicita valores superiores incluso en casos similares al que nos convoca. Por otro lado, sus peticiones son abiertamente exageradas, inconducentes e injustificadas por cuanto solicita el reconocimiento de sumas de dinero que no han sido concedidas excepcionalmente en casos de muerte. Recordemos el caso de la víctima que falleció en un accidente aéreo la

¹⁰ Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Prueba de los Perjuicios Morales Subjetivados. Pág. 508.
Página 35 de 114

Corte reconoció la suma de **cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos (\$ 47.472.181)** por concepto de daño moral, mientras que en el caso particular se trata de hechos similares, pero se pretenden \$ 116.000.000, para los demandantes.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

4. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL SUPUESTO DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, ASÍ COMO SU CUANTIFICACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA Y PRETENDIDA POR LOS DEMANDANTES,

Sea lo primero indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psicofísica que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias o bienes de la vida que disfrutaba antes del hecho lesivo. Así, este perjuicio se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida de la víctima y la pérdida de la posibilidad de tener contacto con las demás personas o relacionarse con ellas. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para su solicitud. En efecto, el reconocimiento del daño a la vida en relación, se da única y exclusivamente a la víctima directa en razón al daño, por lo cual, resulta totalmente improcedente el reconocimiento a cualquier otro reclamante y que no tenga su génesis en la producción de lesiones.

Es precioso, que, con base en lo anterior, traigamos a consideración el postulado de la H. Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 29 de marzo de 2017, en la que se indicó lo siguiente:

*“(...) b) Daño a la vida de relación: **Este rubro se concede únicamente a la víctima directa** del menoscabo a la integridad como medida de compensación por la pérdida*

Página 36 de 114

*del bien superior a la salud, **que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales** (...)" (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Por la postura expuesta, se cree necesario considerar que la parte demandante, pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no sería procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de la existencia de lesiones debidamente acreditadas, y pese a ello, en todo caso, el reconocimiento invocado es superior a los casos de similitudes circunstancias de que nos ocupa, que en diferentes postulados la H. Corte Suprema ha reconocido.

Pues bajo la comprensión que se desprende de la lectura del escrito genitor, se evidencia una desmesurada solicitud de perjuicios por concepto de daño a la vida en relación por un valor de \$116.000.000 para cada uno de los demandantes. Claramente, es evidente el ánimo especulativo de la errónea tasación del daño a la vida en relación, y la errónea solicitud de dicho concepto en favor de todos los demandantes, atendido lo ya expuesto, donde el daño aquí reclamado es única y exclusivamente reconocido a la víctima directa del menoscabo, es por ello que no hay lugar al reconocimiento de dicha pretensión a cualquier otro reclamante.

Adicionalmente, resulta necesario manifestar que respecto al daño a la vida de relación iure hereditatis, esta es un tipo de tipologías de perjuicio, analiza las cargas o dificultades a las que se encuentra sometida la persona como consecuencia de un hecho dañoso. En el caso que nos convoca, resulta propio reiterar que la víctima falleció, se toma como improcedente este tipo de reconocimiento indemnizatorio, máxime cuando la muerte del señor Ávila fue al día siguiente del accidente de tránsito, y por tanto es evidente que la víctima directa no pudo sentir o percibir las cargas, afectaciones e impedimentos para ejercer las actividades rutinarias.

.

En conclusión, el reconocimiento de este perjuicio es improcedente, porque, sumado a la ausencia de demostración de la responsabilidad que se pretende endilgar, no es viable el reconocimiento a cualquier reclamante distinto a la víctima directa, además, y sin perjuicio de lo anterior, las sumas solicitadas exceden los límites concedidos por esta jurisdicción para este tipo de perjuicio.

Por todo lo anterior, solicito respetuosamente al Juzgador declarar probada esta excepción.

5. IMPROCEDENCIA AL RECONOCIMIENTO DE LA SUPUESTA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

La parte actora pretende una cuantiosa indemnización por concepto de la pérdida de oportunidad que presuntamente padecieron los demandantes en atención a los hechos ocurridos el 01 de julio de 2022, sin embargo, no existe daño que dé lugar a indemnización bajo este concepto, ya que no existe ningún tipo de oportunidad cierta que se haya perdido con ocasión al accidente de tránsito respecto al cual se erige este trámite.

Para analizar la viabilidad de la solicitud que eleva la parte actora bajo el concepto de pérdida de oportunidad, resulta pertinente traer a colación los criterios que la Corte Suprema ha desarrollado en su jurisprudencia para identificar la procedencia del reconocimiento de este perjuicio:

Sus presupuestos axiológicos, para que pueda considerarse como daño indemnizable según la elaboración jurisprudencial de esta Corporación refieren a:
(i) Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad, y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance” diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii) Imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad para conseguir el

beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización[...]; y (iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado; no es cualquier expectativa o posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles, no puede aceptarse que [...] su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos.¹¹

Al examinar el presente caso a la luz de los criterios reseñados por la Corte, se hace palmario que no existe ningún tipo de oportunidad cierta que se haya perdido con ocasión al accidente del 01 de julio de 2022. La parte actora se limita solicitar el reconocimiento de este perjuicio sin realizar una mínima labor explicativa acerca de qué fundamenta su pretensión. Se resalta que, en la solicitud, como es de esperarse, no se identifica de forma concreta ningún beneficio económico del que estuviera a la espera la actora y que se hubiere perdido por la ocurrencia del accidente. Debe negarse entonces el reconocimiento de este perjuicio.

Solicito declarar probada esta excepción.

6. TASACIÓN INDEVIDA E INJUSTIFICADA DEL SUPUESTO LUCRO CESANTE EN FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA RUBIELA GRIJALBA

Mediante la presente excepción se demostrará al despacho que la demandante María Rubiela Grijalba no se le pueden reconocer ninguno de los conceptos indemnizatorios materiales que solicita en la demanda. Lo anterior, toda vez que: (i) la causa del accidente

¹¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de junio de 2016. Rad: 2006-272. (M.P: Margarita Cabello Blanco)

es imputable al señor Enrique Ávila (Q.E.P.D.); (ii) En el expediente no hay ningún medio de prueba que corrobore, fehacientemente que el señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.) efectivamente hubiera tenido algún tipo de vinculación laboral, ni pruebas de sus ingresos económicos, para la fecha de los hechos objeto del presente litigio. (iii) No se puede desconocer que el sistema RUAF informa que el hoy fallecido era pensionado, así mismo se logró evidenciar que la señora María Rubiela Grijalba recibe una pensión vitalicia, lo que da cuenta que la hoy demandante, no dependía económicamente del hoy fallecido y que consecuentemente no presentó afectación en su ingreso económico.

Es pertinente manifestar que el lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*“(...) en cuanto perjuicio, **el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual.** (...) Vale decir que el **lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de***

ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (...) Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea, la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables (...)”¹²
(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente:

*“(...) Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego, **a condición de que no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable**, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho», según lo explicó esta Corporación en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov (...)”*

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante

¹² Corte Suprema de Justicia. Sentencia Rad. 2000-01141 del 24 de junio de 2008.
Página 41 de 114

“(…) resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido (…)”¹³ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda fueron calculados, estimados o valorados de forma completamente equivocada. De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En tal virtud, ante la ausencia de prueba del lucro, claramente deberá denegarse totalmente esta pretensión incluida en la demanda

Se advierte que, de conformidad con las pretensiones de la demanda, se solicitan por lucro cesante por la suma de: \$273.571.308, sin embargo, ese reconocimiento no es procedente por lo que se pasa a explicar:

A. No hay prueba de que haya existido una relación laboral. No se adoso prueba alguna, que de cuenta que el señor Enrique Ávila (Q.E.P.D.), en vida realizaba una actividad laboral que le generaba algún tipo de ingreso económico, y bajo la búsqueda en la plataforma RUAF, se logró observar que el hoy fallecido era pensionado, y para la fecha de los hechos el señor Ávila (Q.E.P.D.), contaba con 69

¹³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC4966-2019. Expediente 2011-00298. M.P. Ángel Alonso Rico Puerta.

años de edad, la cual ya no se encuentra relacionado como una edad laboralmente activa.

B. La señora María Rubiela Grijalba es pensionada: más allá de ser la compañera permanente del señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D), la hoy demandante pretende ostentar una posición de dependencia económica. No obstante, el expediente se encuentra huérfano de elementos que permitan acreditar tal pretensión, no bastando las meras manifestaciones de los demandantes sobre este particular. Sin perjuicio de ello, es necesario advertir que, como consta en la siguiente imagen tomada de consulta realizada en el Registro Único de Afiliados – RUAF, desde el 05 de septiembre de 2022 mediante resolución No. 240952 la demandante es beneficiaria de una pensión de sobrevivencia vitalicia por parte de Colpensiones, siendo claro como la misma no se ha visto afectada o mermada económicamente como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 01 de julio de 2022:

PENSIONADOS						Fecha de Corte: 2022-12-22
Entidad Pagadora de pensión	Entidad que reconoce la pensión	Tipo de Pensión	Estado	Tipo de Pensionado	Fecha Resolución	Número Resolución Pension PG
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	Sobrevivencia vitalicia riesgo común	Activo	Régimen de prima media con tope máximo de pensión	2022-09-05	240952

En conclusión, es claro cómo no se materializó el perjuicio pretendido por la parte demandante, como consecuencia de los hechos acaecidos el 01 de julio de 2022, como quiera que i) no se haya acreditado que el señor Jorge Enrique Ávila (Q.E.P.D.) se encontrara laboralmente activo para el momento de ocurrencia de los hechos y en todo caso, se haya acreditado que para el momento de ocurrencia del accidente el mismo estaba pensionado ii) no se acreditó que la señora María Rubiela Grijalba dependiera económicamente el referido señor y en todo caso la misma es beneficiaria de una pensión vitalicia de sobreviviente, lo cual apareja que como consecuencia de los hechos sobre los que se erige el trámite no se ocasionaron perjuicios de tipo patrimonial a la demandante que deban ser resarcidos o indemnizados.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO

7. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., DEBIDO A QUE NO SE HA CUMPLIDO CON LA ACREDITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL ART. 1077 DEL C. Co.

En el presente caso los reclamantes no han demostrado la ocurrencia de accidente de tránsito, pues el fatal deceso del señor Jorge Enrique Ávila, se causó por la impericia en la conducción de la motocicleta que él mismo conducía, lo cual se corrobora con el IPAT, consigna la hipótesis 142 en cabeza del conductor de la motocicleta de placa KZE-12D. Aunado a ello, no se ha probado la cuantía de la pérdida, en la medida que las peticiones de lucro cesante son antitécnicas puesto que no se ha probado la actividad económica, y el presunto ingreso económico percibidos por la demandante señora Rubiela Grijalba. Por tal razón no se ha cumplido con lo exigido en el artículo 1077 del Código de Comercio originando así la improcedencia de la afectación de la póliza número 1507122008713.

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, por cuanto está suficientemente claro que el riesgo asegurado en la póliza es

Página 44 de 114

la responsabilidad en la que incurra el asegurado proveniente un accidente de tránsito y como quiera que en este caso no obra prueba que demuestre que el accidente ocurrido el 01 de julio de 2022 se ocasionó como consecuencia de las conductas del conductor del vehículo de placa VCS-574, por lo que, es evidente que no se ha realizado el riesgo asegurado y en consecuencia no surge la obligación condicional del asegurador.

Así pues, teniendo en cuenta que el señor Héctor Fabio Mora Rivera no tuvo ninguna injerencia con el fatal fallecimiento del señor Enrique Ávila, en razón a que, la conducta del conductor de la motocicleta fue el único factor relevante y adecuado que incidió en el accidente de tránsito ocurrido el día 01 de julio del 2022, por cuanto fue a causa de su impericia en la conducción de la motocicleta, que se genera la colisión con el vehículo de placas VCS-574, por cuanto en este caso medió un hecho de la víctima que rompe el nexo causal que pretende endilgar la parte actora. Razón por la cual, no existe obligación de indemnizar por parte de la Compañía de Seguros. Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte Demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. *Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.*

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.” (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

“Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguratorio, el asegurador contrae

una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (...)”

“(...) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (...) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (...)*”

“(...) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080)¹⁴ ” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

¹⁴ ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125. Página 46 de 114

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

“2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.

2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).

2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (...), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).

2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art. 1089, ib.)¹⁵.

¹⁵ Sentencia SC2482-2019 de 9 de julio de 2019, Radicación n.º 11001-31-03-008-2001-00877-01. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MP: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Página 47 de 114

La Corte Suprema de Justicia ha establecido la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

“(…) Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio. En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios¹⁶” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte Demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1077 del C. Co. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del Asegurador.

A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

¹⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 1100131030241998417501
Página **48** de **114**

(i) La no realización del Riesgo Asegurado.

Sin perjuicio de las excepciones anteriores, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas de la póliza de automóviles de servicio público No. 1507122008713, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Se aclara que, mediante el referido contrato de seguro, en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado nombrado en la carátula de la póliza, o el conductor designado cuando este sea civilmente responsable de acuerdo con la legislación colombiana y a los términos, estipulaciones, excepciones y limitaciones contempladas en la póliza.

En efecto, en la póliza de automóviles de servicio público No. 1507122008713, se pactó lo siguiente:

Cláusula 1 - Amparos

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., denominada en adelante La Compañía, cubre dentro de la vigencia del seguro los daños corporales causados directa y exclusivamente por accidente de tránsito a terceros afectados y personas ocupantes del vehículo de servicio público especial, los perjuicios, daños o pérdidas que sufra el Asegurado, de acuerdo con las condiciones generales estipuladas a continuación y a las particulares indicadas en la carátula o en los anexos de la póliza.

Los amparos que pueden ser contratados de acuerdo con los productos que ofrece la Compañía, se enumeran a continuación:

1. Amparo básico
 - Responsabilidad Civil Extracontractual

De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguros en comento no es otro que la “*Responsabilidad Civil Extracontractual*” en que incurra el asegurado de acuerdo con la legislación colombiana. Dicho de otro modo, el

Página 49 de 114

contrato de seguro documentado en la la póliza de automóviles de servicio público No. 1507122008713, entrará a responder, si y sólo si el asegurado o el conductor autorizado, es declarado civilmente responsable por un hecho constitutivo de responsabilidad civil contractual, acreditada mediante los medios idóneos. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad Civil constituirá el “ *siniestro* ”, esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del Co. Co.).

Sin embargo, en este caso encontramos que tal riesgo no se estructuró, pues de acuerdo a los medios de prueba obrantes en el expediente, la parte activa del litigio no logró demostrar y acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 01 de julio 2022, por lo tanto, no cumplió con su carga procesal y legal de demostrar la ocurrencia del siniestro, es decir, existe una fractura del nexo causal y, por ende, la negación de todas las pretensiones de la demanda.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria, pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, el demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo del asegurado y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no tuvo ninguna injerencia las conductas del conductor del automóvil asegurado en la ocurrencia del accidente, ni se ha demostrado que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de la responsabilidad del conductor del mismo vehículo. Como consecuencia, no hay obligación condicional por parte de la Aseguradora.

(i) Acreditación de la cuantía de la pérdida.

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, toda vez que no se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso. Puesto que los demandantes solicita el reconocimiento de lucro cesante, sin embargo, no se acredita por ningún medio de prueba fehaciente, conducente y pertinente la ocurrencia en dicha afectación, ni mucho menos una relación laboral, que permita establecer verdaderamente el ingreso de algún valor económicos. En ese sentido, no podrían reconocerse con cargo a la póliza de seguro.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad del Asegurado por un accidente ocasionado por el conductor del vehículo de placa VCS-574. Por otro lado, respecto a la acreditación de la cuantía de la supuesta pérdida, no se encuentra probada, como quiera que el lucro cesante, daño a la pérdida de oportunidad, daño a la vida en relación y el daño moral es improcedente. Del incumplimiento de las cargas que imperativamente establece el artículo 1077 del Código del Comercio por la parte Demandante, basta con remitirnos a las pruebas aportadas con la demanda, en donde se evidencia la carencia de elementos demostrativos que acrediten la realización del riesgo asegurado y la supuesta pérdida. Por tanto, es claro que no se cumplen las cargas del artículo 1077 del Código de Comercio por lo que deberán negarse las pretensiones de la demanda.

8. FALTA DE COBERTURA MATERIAL DEL CONTRATO DE SEGURO FRENTE A LOS PERJUICIOS INMATERIALES – DAÑO MORAL

De conformidad con nuestra legislación civil en los contratos de seguro el asegurador cuenta con la facultad de delimitar la extensión de los amparos o coberturas asumidos por el mismo, de tal suerte, este sólo se obligará respecto a aquellos amparos expresamente

Página **51** de **114**

otorgados. No obstante, de la simple lectura de las condiciones de la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, es claro que esta no brinda cobertura respecto a los perjuicios morales.

En el entendido de que con base al artículo 1056 del Código de Comercio el asegurador puede a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume, en reciente fallo del 04 de abril de 2022¹⁷ la Corte recordó:

*(...) **ante la amplitud de los eventos que son susceptibles de ser amparados, la aseguradora puede especificar «los riesgos cuya cobertura se obligan en virtud de la misma»** (SC8435, 2 jul. 2014, rad. n.º 2002-00098-01), como lo reconoce el artículo 1056 del Código de Comercio, a saber: «[c]on las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado».*

*Refiriéndose a este precepto, la Corporación dijo que en la especificación de los riesgos **«se reconoce plena autonomía al asegurador, a quien el artículo 1056 ejusdem, norma aplicable a los seguros de daños y de personas, le otorgó la potestad de delimitar espacial, temporal, causal y objetivamente los eventos por cuya ocurrencia se obligaría condicionalmente a indemnizar al beneficiario, pues estatuyó que podía asumir, con las restricciones legales»** (SC4527, 23 nov. 2020, rad. n.º 2011-00361-01).*

(...)

*Estas estipulaciones, conocidas como **«cláusulas de exclusión»**, tienen por finalidad **limitar «negativamente el ‘riesgo asegurado’, al dejar por fuera de cobertura***

¹⁷ Sentencia SC487-2022 del 04 de abril de 2022. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Página **52** de **114**

algunas situaciones que podrían estar allí comprendidas y que, por ende, de acontecer no son indemnizables. De tal manera que su consagración no conduce a la desaparición o alteración del componente económico previsto en favor de los beneficiarios, sino a la imposibilidad de que las reclamaciones por los hechos al margen de la protección tengan éxito» (SC4574, 21 ab. 2015, rad. n.º 2007-00600-02). (Énfasis de autoría)

Al respecto, resulta oportuno señalar que, a su vez, la Doctrina ha sido pacífica al entender el contrato de seguro como un acto jurídico que proviene de la voluntad de las partes, siendo, por tanto, una expresión del principio de la autonomía de la voluntad privada. De tal suerte, autores como como Castro (2019) han sostenido que:

“Quien celebra un negocio jurídico en virtud de la autonomía privada está creando una nueva relación jurídica, que no existía aún. [...] La autonomía privada únicamente tiene sentido desde el derecho, como la posibilidad de crear, modificar o extinguir relaciones y normas jurídicas. [...] Se trata de un poder normativo, es decir, una potestad de crear normas jurídicas y la autonomía de la voluntad es la fuente de que ellas se derivan”.¹⁸

Igualmente, como lo explica Ospina Fernández (2005), este postulado se fundamenta en la independencia que otorga el legislador a los particulares para regular sus propias relaciones sociales. En otras palabras, se otorga eficacia jurídica a la iniciativa privada para atribuir los efectos que mejor se enmarquen a su propósito particular¹⁹. Así pues, como una manifestación de la autonomía de la voluntad privada, de conformidad con las condiciones particulares y generales del contrato de seguro instrumentado a mediante la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada delimitando la extensión

¹⁸Castro de Cifuentes, M. (2019). Los contratos normativos y los contratos marco en el derecho privado contemporáneo. Estudios Socio-Jurídicos, 21(1), 121-150.

¹⁹ Ospina Fernández, G. (2005). TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURÍDICO. Editorial Temis S.A.

del riesgo asumido por ella, estipulándose al respecto lo siguiente:

2.1.19. Los derivados de la pérdida de beneficios y los perjuicios morales del asegurado y de las víctimas en ninguna forma.

De tal suerte, a fin de que la póliza respecto a la cual se vincula a mi procurada a este trámite brindara cobertura en relación a los perjuicios inmateriales (daño moral) era necesario que tales amparos y/o coberturas fueran expresamente concertadas, no obstante, de la simple lectura de las condiciones de la póliza se colige como este amparo no fue otorgado por mi procurada, luego, es palmaria la falta de cobertura material respecto a los perjuicios morales, aparejando ello que ante una eventual, remota e hipotética condena en contra de los intereses de mi procurada la misma no podrá ser condena en forma alguna al pago o resarcimiento de tales perjuicios.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

9. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA No. 1507122008713, EMITIDA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO.

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con

Página 54 de 114

ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”²⁰ (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte

²⁰ Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.
Página 55 de 114

de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, no sólo por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, sino porque supera totalmente los baremos jurisprudenciales reiterados en muchas oportunidades por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto la parte demandante sobre los conceptos de daño moral, daño a la vida de relación, lucro cesante consolidado y futuro, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

**10. LÍMITE ASEGURADO DE LA PÓLIZA No. 1507122008713, EMITIDA POR
MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A.**

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro No. 1507122008713, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación alguna de mi representada, cabe mencionar que, en el remoto evento y muy improbable escenario de que a mi procurada se le hiciera exigible la afectación del negocio contractual expedido por ella, mediante la cual se aseguró la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, se estipularon las condiciones, los límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, los deducibles pactados, etc. De manera que exclusivamente son estos los parámetros que determinarían en un momento dado la posible responsabilidad que podría atribuirse a mi poderdante, en cuanto enmarcan la obligación condicional que contrajo y las diversas cláusulas del aseguramiento, incluso y sin perjuicio de las estipulaciones que la exoneran de responsabilidad, que pido declarar en el fallo.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”²¹.

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza No. 1507122008713 ,se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la póliza No. 1507122008713, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

²¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.
Página **58** de **114**

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
1.1.1 MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	1.000,00 SMLMV		10 % Min 1 (SMLMV) NO APLICA
1.1.2 MUERTE O LESIONES A MÁS PERSONAS	1.000,00 SMLMV		NO APLICA
1.2 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL			

Sin embargo, el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a la vigencia comprendida entre el 20 de marzo del 2022 hasta el 19 de marzo del 2023.

En la causa que nos asiste, de acuerdo con los límites máximos establecidos en el contrato aseguratorio, el monto máximo que hipotéticamente correspondería a mi procurada indemnizar, por los reprochados en el libelo genitor, es de 1.000 SMLMV para el amparo dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual, muerte o lesiones a una persona. De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

11. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor

Página 59 de 114

asegurado no habrá lugar a cobertura alguna. Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

12. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A. Y LOS CODEMANDADOS.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia²² ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte²³ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

“La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.

Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la

²² Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

²³ Ibídem.

*relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización**. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario. (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

13. IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE INTERESES MORATORIOS CONFORME AL ARTÍCULO 1081 DEL C.CO.

Es claro que para que nazca a la vida la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de mi representada, se requería que el asegurado cumpliera con la carga establece en el artículo 1077 del C.Co., ante la ausencia de acreditación de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida no puede predicarse la existencia de obligación alguna y por ende tampoco puede considerarse que mi representada se encuentre en mora, dado que, no es

Página **61** de **114**

posible predicarse la mora de una obligación inexistente, por lo dicho es claro que ningún respaldo encuentra la solicitud de pago de intereses de mora más cuando no se ha demostrado la responsabilidad a cargo del conductor del vehículo de placa VCS-574, y tampoco la cuantía de la pérdida que se traduce en monto pretendido como indemnización. Por lo anterior mientras se encuentren insatisfechos los dos presupuestos anteriores no es posible afirmar que haya nacido obligación alguna y mucho menos que se encuentre insatisfecha.

. Es decir se encuentra insatisfecho el cumplimiento de la acreditación del siniestro y la cuantía de la pérdida y que siendo estos dos elementos esenciales en los términos del artículo 1077 del C.Co para acreditar el derecho a recibir una indemnización por parte del asegurador debe afirmarse enfáticamente que mientras no se pruebe tales presupuestos no es posible considerar que ha nacido a la vida jurídica la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de la compañía aseguradora . Por lo dicho, salta a la vista que ni de manera pre judicial ni siquiera en esta instancia el asegurada ha acreditado la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida, por ende no podría tampoco predicarse la mora de una obligación que no ha surgido como consecuencia de la misma omisión en la acreditación de las cargas del artículo 1077 del C.Co que se encuentra en cabeza del conductor del vehículo de placa VCS-574, señor Hector Fabio Mora.

Ahora bien, debe dejarse claro que en el hipotético y remoto evento en que el Honorable Despacho considere que la indemnización es procedente y que existe obligación por parte de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., se deberá tener en consideración que la certeza sobre dicho derecho sólo quedará probado al momento de proferirse sentencia, porque en ninguna medida la parte Demandante demostró de manera extrajudicial la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, por lo que si el Despacho encontrara sustento de tal pretensión es claro que ello implicaría que los presupuestos del artículo 1077 se demostraron en el curso del proceso, después de surtirse el debate probatorio y por ende no podría condenarse al pago de intereses moratorios desde el momento en que se efectuó

Página **62** de **114**

una solicitud de indemnización (que no es en ninguna medida una reclamación) sino únicamente a partir de la decisión judicial.

Como sustento de lo anterior, se encuentra que la Corte Suprema de Justicia en cuanto al momento en el que se empiezan a causar los intereses moratorios, ha establecido en distintas oportunidades que éstos empiezan a causarse a partir de la ejecutoria del fallo judicial que da certeza a la obligación. Específicamente, en la reciente sentencia del 26 de mayo de 2021, en la que se indicó textualmente:

“Respecto del momento a partir del cual procedía disponer el pago de intereses moratorios, conforme al análisis que se dejó consignado al estudiarse el cargo segundo del recurso extraordinario de casación, al que se hace remisión expresa, se colige el desacierto de la fecha fijada por el a quo con tal fin -6 de septiembre de 2010-, misma señalada por el Tribunal, la cual, por ende, deberá modificarse, para disponer que la eventual causación de los indicados réditos, será a partir de la ejecutoria del presente fallo²⁴”

Aunado al anterior pronunciamiento, es relevante resaltar cómo la Corte Suprema ha dicho que la sanción a la que corresponde los intereses de mora no puede ser aplicada de manera objetiva sino que debe atenderse al caso concreto a fin de evaluar el motivo de retardo en el pago, lo anterior en palabras de la Corte al indicar que:

“De igual modo, en providencia del 29 de abril de 2005, reiteró: “ a la luz de los principios generales relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones, principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el artículo 1080 del C. de Co., desde el momento en que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que comienza la mora del

²⁴ Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC1947-2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. 26 de mayo de 2021.

asegurador, es decir desde el día en que la deuda a su cargo es líquida y exigible, o mejor, lo habría sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo legítimo la liquidación de la indemnización y el consiguiente pago, dicho asegurador, además de realizar la prestación asegurada, está obligado al resarcimiento de los daños”

Los fragmentos jurisprudenciales que acaban de citarse explican que la aseguradora sólo incurre en mora cuando no paga la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de la reclamación, si ésta se ha hecho debidamente por el asegurado y con el cumplimiento de las carga probatorios sobre la existencia del siniestro y el valor del daño.

Pero esta sanción-ha afirmado esta Corte-no se impone de manera objetiva, pues para que haya lugar a ella es necesario que la falta de pago de la indemnización carezca de causa justificada o le sea imputable al asegurador, por lo que el juez deberá entrar a valorar en todos los casos el motivo de retraso en la liquidación.

En ese orden- prosiguió esta corporación- si la excusa de la aseguradora consiste en que no fue posible determinar el monto del daño, y logra probar ese hecho en el proceso, entonces no habrá lugar a imponerle sanción alguna, porque es claro que la falta de satisfacción oportuna de la obligación no se debió a su culpa, tal como ha sido explicado por esta sala: “En consecuencia, el monto líquido de la prestación es presupuesto estructural de la obligación de pagar el capital asegurado y de la mora (in illiquidis mora non fit), razón por la cual, en ausencia de comprobación, no es exigible ni la indemnización ni la sanción moratoria”²⁵. (Sentencia de 27 de agosto de 2008.Exp- 1997-14171-01”

²⁵ Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5681 de 2018, MP. Ariel Salazar Ramírez
Página 64 de 114

Lo anterior, deja claro que como a la fecha no se ha demostrado que ocurriera el siniestro es decir los presuntos daños de mayor cuantía producto del accidente del 01 de julio del 2022 y tampoco la cuantía de la pérdida reclamada, es claro que únicamente con la decisión final que adopte el juzgador se podrá establecer si efectivamente se cumplen las cargas del artículo 1077 del C.Co y en efecto se otorgará certeza al derecho pretendido, por lo que de ninguna manera se podría condenar al pago de intereses moratorios desde que el demandante efectuó la solicitud de indemnización comoquiera que tal pedimento nunca se constituyó en una verdadera reclamación que acreditara los dos presupuestos antes enunciados. Luego, antes de proferirse el fallo no existe certeza sobre la obligación presuntamente pendiente de indemnizar.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

14. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS.

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley en virtud de lo reglado en el artículo 282 del Código General del Proceso.

CAPÍTULO II

CONTESTACIÓN FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. Y HECTOR FABIO MORA A MI REPRESENTADA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO

Página 65 de 114

Frente al hecho 1.1º: CIERTO, La sociedad GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. EN REORGANIZACIÓN y HÉCTOR FABIO MORA RIVERA han sido vinculados al presente proceso Responsabilidad Civil Extracontractual incoado por MARÍA RUBIELA GRIJALBA Y OTROS en contra de HÉCTOR FABIO MORA RIVERA, BANCOLOMBIA S.A y otros. proceso con radicado No. 760013103003-2022-00250-00, que se adelanta ante el JUZGADO TERCERO (3) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso indicar que, para un análisis de las condiciones particulares y generales del contrato de seguro y para ser afectada la póliza, debe acreditarse por parte del extremo demandante, prueba idónea de los elementos que acreditan la responsabilidad por parte del conductor del vehículo asegurado, y en este caso al no existir prueba idónea que permita acreditar la responsabilidad no da lugar si quiera a analizar el contrato de seguro.

Frente al hecho 1.2º: ES CIERTO, en cuanto a que entre **GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SA EN REORGANIZACION** y **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A**, se suscribió contrato de seguro documentado en la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil No. 1507122008713, con vigencia comprendida entre el 20 de marzo del 2022 al 19 de marzo del 2023. Empero, se deberá probar por parte del extremo demandante los elementos de la responsabilidad y el deber jurídico a cargo de la llamada en garantía, para efectos de que eventualmente sea viable la afectación del contrato de seguro, lo cual no ha ocurrido.

Por lo anterior debe ser claro para el Despacho que la existencia de un contrato de seguros no implica *per se* la obligación indemnizatoria en cabeza de mi representada. Lo anterior, toda vez que se debe cumplir en primer lugar, con la acreditación del hecho dañino en cabeza del asegurado, elemento este que no se encuentra acreditado al interior del presente trámite. en segundo lugar, que se encuentren agotados los presupuestos de la modalidad de la póliza otorgada por mi procurada, es decir, que los hechos hubieran

Página **66** de **114**

ocurrido durante la vigencia de la póliza, y, en tercer lugar, que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro.

Como quiera que la llamada en garantía hace alusión al amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual se deje tener en conocimiento las condiciones generales de la Póliza de seguro, tal y como se ilustra a continuación:

3.1.1. Definición Responsabilidad Civil Extracontractual: Siempre y cuando en la carátula de la póliza se indique expresamente esta cobertura, la Compañía indemnizará, dentro de los límites señalados en la carátula de la póliza, los perjuicios que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un evento ocasionado por el vehículo descrito en la carátula de la póliza,

conducido por el asegurado o persona autorizada por él, o cuando el vehículo se desplace sin conductor, del lugar donde ha sido estacionado por alguno de ellos.

Por lo anterior, en este caso no es posible la afectación a la póliza de Responsabilidad Civil No. 1507122008713 por cuanto no está demostrada la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, y en el hipotético y remoto caso de llegarse a declarar la responsabilidad se deberá tener sujeción al contrato de seguro y en sí a las condiciones particulares señaladas en la caratula de la Poliza para cada una de las coberturas de los amparos de Responsabilidad Civil Extracontractual y las condiciones generales, así mismo a los deducibles pactados y exclusiones que hacen parte integral del contrato de seguro.

Frente al hecho 1.3º: ES CIERTO, en cuanto a la vigencia de la póliza entre el 20 de marzo del 2022 al 19 de marzo del 2023, empero se aclara que la existencia de un contrato de seguros no implica *per se* la obligación indemnizatoria en cabeza de mi representada. Lo anterior, toda vez que se debe cumplir en primer lugar, con la acreditación del hecho dañino en cabeza del asegurado, elemento este que no se encuentra acreditado al interior del presente trámite. en segundo lugar, que se encuentren agotados los presupuestos de la modalidad de la póliza otorgada por mi procurada, es decir, que los hechos hubieran ocurrido durante la vigencia de la póliza, y, en tercer lugar, que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro.

Frente al hecho 1.4º: Lo que se manifiesta en este numeral no es un hecho sino una apreciación subjetiva de la llamante en garantía. Por lo anterior, en este caso no es posible la afectación a la póliza de Responsabilidad Civil No. 1507122008713 por cuanto no está demostrada la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, y en el hipotético y remoto caso de llegarse a declarar la responsabilidad se deberá tener sujeción al contrato de seguro y en sí a las condiciones particulares señaladas en la caratula de la Poliza para cada una de las coberturas de los amparos de Responsabilidad Civil Extracontractual y las condiciones generales, así mismo a los deducibles pactados y exclusiones que hacen parte integral del contrato de seguro

Por lo anterior, en gracia de discusión, y ante una eventual condena que implique la afectación del contrato de seguro en virtud del cual se vinculó a mi prohijada al presente proceso, se debe ceñir estrictamente a los valores asegurados, los deducibles pactados y a las condiciones particulares y generales de la póliza en comento.

Frente al hecho 1. 5º: Lo que se manifiesta en este numeral no es un propiamente un hecho, sino se trata de la manifestación que realiza la apoderada de los llamados en garantía en cuanto al derecho de postulación que la faculta para representar los intereses de GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. EN REORGANIZACIÓN y

Página **68** de **114**

II. FRENTE A LAS PETICIONES DEL LLAMAMIENTO

FRENTE A LA PETICIÓN 2.1: NO ES NECESARIO REALIZAR PRONUNCIAMIENTO a la prosperidad de la pretensión, en el entendido que, la solicitud del llamamiento en garantía fue admitida por el Despacho en auto del 4 de mayo de 2023 dentro del asunto objeto de controversia, por lo tanto, es inocua dicha declaración.

FRENTE A LA PETICIÓN 2.2: ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión. Por cuanto no se encuentra probado a través de prueba idónea la existencia de responsabilidad civil extracontractual en cabeza del conductor del vehículo asegurado, y por ende los elementos de la presunta responsabilidad no se encuentran acreditados, por lo tanto, de entrada no es posible si quiera de analizar la relación sustancial que se suscita de cara a mi prohijada. Ahora bien, en gracia de discusión, ante una eventual y remota condenar a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, es preciso aclarar que la naturaleza del contrato de seguro es de carácter indemnizatorio, de manera que, bajo ningún fundamento jurídico puede o debe ser fuente de enriquecimiento sin causa y debe estar sujeto a los límites del valor asegurado, las condiciones del riesgo asegurado, y la configuración en cabeza del extremo demandante de los elementos de la responsabilidad civil. En este caso, la afectación de dicho contrato es improcedente, y en consecuencia el llamado en garantía, toda vez que la condición de la que pende el nacimiento de la obligación indemnizatoria en contra de mi prohijada no ha surgido, según lo pactado en el contrato respectivo, por no haberse demostrado la existencia de responsabilidad civil en cabeza del asegurado y por contera no se probó el acaecimiento del riesgo asegurado bajo las correspondientes pólizas.

III. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL LLAMAMIENTO

1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO

Sin perjuicio de las excepciones planteadas en la contestación de la demanda, se formula la presente de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas de la Póliza. Toda vez que de la mera lectura de la póliza podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante la póliza por la que se vincula a mi representada a este proceso, la aseguradora indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, excluyendo el daño moral, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en la póliza, pese a ello en este caso la responsabilidad del accidente es atribuible a la propia víctima.

En el presente caso los reclamantes no han demostrado la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado en la ocurrencia de accidente de tránsito, pues el fatal deceso del señor Jorge Enrique Ávila, se causó por la imprudencia en la conducción de la motocicleta que él mismo conducía, lo cual se corrobora con el IPAT, consigna la hipótesis 142 en cabeza del conductor de la motocicleta de placa KZE-12D, lo anterior denota que fue la propia víctima quien causo el daño por el que hoy se promueve este proceso pero que en ninguna medida puede ser indemnizado con cargo a la póliza número 1507122008713, pes operó un excluyente de responsabilidad que en definitiva comportará la negación de todas las pretensiones de la demanda.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha indicado con claridad que cuando la conducta imprudente de la víctima fue suficiente para causar el daño, debe liberarse de toda responsabilidad al extremo pasivo de la litis así:

Página **70** de **114**

“La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.

(...)

Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él ya haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella.

(...)

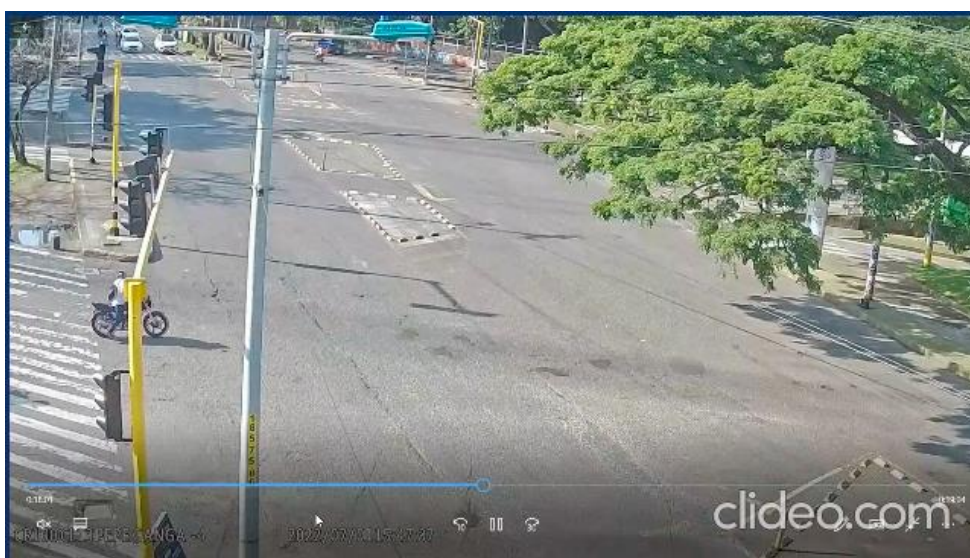
En todo caso, así se utilice la expresión “culpa de la víctima” para designar el fenómeno en cuestión, en el análisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto técnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputación es de carácter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la

*infracción de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relación de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio interés. Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que **la “culpa de la víctima” corresponda – más precisamente – a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no solo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño,** con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del código Civil, aun cuando allí se aluda a “imprudencia” de la víctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son “capaces de cometer delito o culpa” o a comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre un daño)*

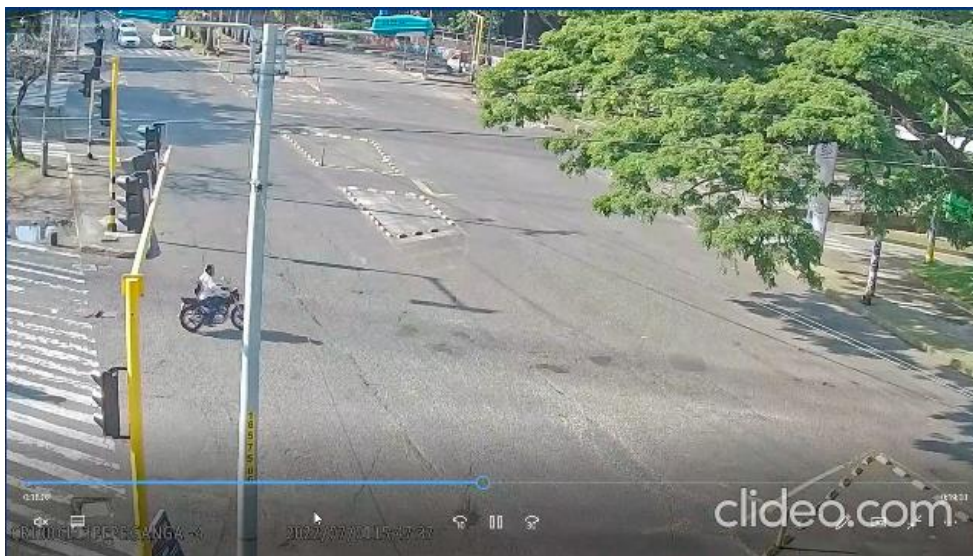
*Así lo consideró esta Corporación hace varios lustros cuando precisó que “en la estimación que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para que tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fenómeno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la víctima, **porque no se trata entonces del hecho-fuente de la responsabilidad extracontractual que exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extraño a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a***

producir una consecuencia jurídica patrimonial en relación con otra persona".²⁶(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Lo anterior debe tenerse en cuenta porque de las mismas pruebas que obran en el expediente se puede concluir que el señor Jorge Enrique Ávila fue quien se pasó el semáforo en rojo y ocasionó el accidente. Por ello, el IPAT demuestra dicha hipótesis y además el video con el que la parte actora pretende imputar responsabilidad demuestra dicha conducta imprudente, veamos:, veamos:



²⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC7534-2015. Sentencia del 16 de junio de 2015. Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramírez.
Página **73** de **114**



Affiliación Persona - Consulta RUAF_Biblioteca Grijalba.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Inicio Herramientas DEMANDA_V_POD... ANEXOS.pdf PLZ - 1507122008... Afiliación Persona - ... x Condicionado Públi... 008SolicitudEntemp... Iniciar sesión

1 / 1 130%

PENSIONADOS Fecha de Corte: 2022-12-22

Entidad Pagadora de pensión	Entidad que reconoce la pensión	Tipo de Pensión	Estado	Tipo de Pensionado	Fecha Resolución	Número Resolución Pensión PG
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	Subsistencia vitalicia riesgo común	Activo	Régimen de prima media con tope máximo de pensión	2022-09-05	240952

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Fecha de Corte: 2022-12-22

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76, Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Fecha: 1/6/2023 9:47:17 AM Pag. 1

En el mismo video que la parte aporta se observa que el motociclista señor Jorge Ávila sobrepasó el semáforo a las 15:47:37 es decir bastantes segundos antes de que se evidencie la circulación de los demás automotores, e incluso se advierte en el video como otro motociclista espera el cambio del semáforo antes de arrancar la marcha, sin embargo, para ese momento el señor Ávila ya había infringido la señal de tránsito. Nótese como en

Página 74 de 114

la última imagen hay un motociclista que aún no ha arrancado la marca porque la luz del semáforo claramente no se lo permitía, sin embargo ya el señor Ávila Castellanos había tomado la fatal decisión de pasar la luz de pare que indicaba el semáforo y terminó exponiéndose a un riesgo que en efecto se terminó materializando pero que en ninguna medida le es atribuible a la parte demandada.

Así pues, teniendo en cuenta que el señor Hector Fabio Mora Rivera como conductor del vehículo de servicio publico no tuvo ninguna injerencia con el fatal fallecimiento del señor Enrique Ávila, en razón a que, la conducta del conductor de la motocicleta fue el único factor relevante y adecuado que incidió en el accidente de tránsito ocurrido el día 01 de julio del 2022, por cuanto fue a causa de su impericia en la conducción de la motocicleta, que se genera la colisión con el vehículo de placas VCS-574, por cuanto en este caso medió un hecho de la víctima que rompe el nexo causal que pretende endilgar la parte actora.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la Aseguradora deberá ser absuelta de cualquier obligación indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurre el asegurado. Sin embargo, los demandantes no lograron estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de las demandadas y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró. El riesgo fue descrito dentro de las condiciones del contrato de seguro de la siguiente manera:

6. Responsabilidad Civil Extracontractual

La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante y daño moral, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en esta póliza. .

El valor asegurado, señalado en la carátula de la póliza, representa el límite máximo de la

19

indemnización a pagar por daños a bienes de terceros y/o muerte o lesiones a terceras personas. Este monto asegurado se considera como límite único combinado restituible por evento.

Estos límites operarán en exceso de los pagos correspondientes a los amparos o coberturas que tengan carácter indemnizatorio o reparatorio del daño en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, FOSYGA, PAS (Planes Adicionales de Salud), EPS, ARL, ARS, Fondos de Pensiones, o de otras entidades de seguridad social.

En conclusión, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que tal como se dijo anteriormente nos encontramos ante una situación en la que no existe nexo causal, pues no se ha demostrado que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de las acciones u omisiones del asegurado ni de alguien autorizado por este. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora. En efecto, en la póliza de automóviles de servicio público No. 1507122008713, se pactó lo siguiente:

trabajadores a su servicio.

asegurado y/o conductor o del beneficiario en la
del derecho al pago de determinado siniestro.

alquiera de las situaciones que se señalan a
establecido en las cláusulas 3.7 y 3.8 de esta póliza:

autorizado del vehículo asegurado porte licencia
inferior a la del vehículo asegurado o transite

De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguros en comento no es otro que la “*Responsabilidad Civil Extracontractual*” en que incurra el asegurado de acuerdo con la legislación colombiana. Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la póliza de automóviles de servicio público No. 1507122008713, entrará a responder, si y sólo si el asegurado o el conductor autorizado, es declarado civilmente responsable por un hecho constitutivo de responsabilidad civil contractual, acreditada mediante los medios idóneos. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad Civil constituirá el “*siniestro*”, esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del Co. Co.).

Sin embargo, en este caso encontramos que tal riesgo no se estructuró, pues de acuerdo a los medios de prueba obrantes en el expediente, la parte activa del litigio no logró demostrar y acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 01 de julio 2022, por lo tanto, no cumplió con su carga procesal y legal de demostrar la ocurrencia del siniestro, es decir, existe una fractura del nexo causal y, por ende, la negación de todas las pretensiones de la demanda. Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no tuvo ninguna injerencia las conductas del conductor del

Página 77 de 114

automóvil asegurado en la ocurrencia del accidente, ni se ha demostrado que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de la responsabilidad del conductor del mismo vehículo. Como consecuencia, no hay obligación condicional por parte de la Aseguradora.

2. FALTA DE COBERTURA MATERIAL DEL CONTRATO DE SEGURO FRENTE A LOS PERJUICIOS INMATERIALES – DAÑO MORAL

De conformidad con nuestra legislación civil en los contratos de seguro el asegurador cuenta con la facultad de delimitar la extensión de los amparos o coberturas asumidos por el mismo, de tal suerte, este sólo se obligará respecto a aquellos amparos expresamente otorgados. No obstante, de la simple lectura de las condiciones de la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, es claro que esta no brinda cobertura respecto a los perjuicios morales.

En el entendido de que con base al artículo 1056 del Código de Comercio el asegurador puede a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume, en reciente fallo del 04 de abril de 2022²⁷ la Corte recordó:

*(...) **ante la amplitud de los eventos que son susceptibles de ser amparados, la aseguradora puede especificar «los riesgos cuya cobertura se obligan en virtud de la misma»** (SC8435, 2 jul. 2014, rad. n.º 2002-00098-01), como lo reconoce el artículo 1056 del Código de Comercio, a saber: «[c]on las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado».*

Refiriéndose a este precepto, la Corporación dijo que en la especificación de los riesgos

²⁷ Sentencia SC487-2022 del 04 de abril de 2022. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Página **78** de **114**

«se reconoce plena autonomía al asegurador, a quien el artículo 1056 ejusdem, norma aplicable a los seguros de daños y de personas, le otorgó la potestad de delimitar espacial, temporal, causal y objetivamente los eventos por cuya ocurrencia se obligaría condicionalmente a indemnizar al beneficiario, pues estatuyó que podía asumir, con las restricciones legales» (SC4527, 23 nov. 2020, rad. n.º 2011-00361-01).

(...)

Estas estipulaciones, conocidas como «cláusulas de exclusión», tienen por finalidad limitar «negativamente el ‘riesgo asegurado’, al dejar por fuera de cobertura algunas situaciones que podrían estar allí comprendidas y que, por ende, de acontecer no son indemnizables. De tal manera que su consagración no conduce a la desaparición o alteración del componente económico previsto en favor de los beneficiarios, sino a la imposibilidad de que las reclamaciones por los hechos al margen de la protección tengan éxito» (SC4574, 21 ab. 2015, rad. n.º 2007-00600-02). (Énfasis de autoría)

Al respecto, resulta oportuno señalar que, a su vez, la Doctrina ha sido pacífica al entender el contrato de seguro como un acto jurídico que proviene de la voluntad de las partes, siendo, por tanto, una expresión del principio de la autonomía de la voluntad privada. De tal suerte, autores como como Castro (2019) han sostenido que:

“Quien celebra un negocio jurídico en virtud de la autonomía privada está creando una nueva relación jurídica, que no existía aún. [...] La autonomía privada únicamente tiene sentido desde el derecho, como la posibilidad de crear, modificar o extinguir relaciones y normas jurídicas. [...] Se trata de un poder normativo, es decir, una potestad de crear

*normas jurídicas y la autonomía de la voluntad es la fuente de que ellas se derivan”.*²⁸

Igualmente, como lo explica Ospina Fernández (2005), este postulado se fundamenta en la independencia que otorga el legislador a los particulares para regular sus propias relaciones sociales. En otras palabras, se otorga eficacia jurídica a la iniciativa privada para atribuir los efectos que mejor se enmarquen a su propósito particular²⁹. Así pues, como una manifestación de la autonomía de la voluntad privada, de conformidad con las condiciones particulares y generales del contrato de seguro instrumentado a mediante la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada delimitando la extensión del riesgo asumido por ella, estipulándose al respecto lo siguiente:

2.1.19. Los derivados de la pérdida de beneficios y los perjuicios morales del asegurado y de las víctimas en ninguna forma.

De tal suerte, a fin de que la póliza respecto a la cual se vincula a mi procurada a este trámite brindara cobertura en relación a los perjuicios inmateriales (daño moral) era necesario que tales amparos y/o coberturas fueran expresamente concertadas, no obstante, de la simple lectura de las condiciones de la póliza se colige como este amparo no fue otorgado por mi procurada, luego, es palmaria la falta de cobertura material respecto a los perjuicios morales, aparejando ello que ante una eventual, remota e hipotética condena en contra de los intereses de mi procurada la misma no podrá ser condena en forma alguna al pago o resarcimiento de tales perjuicios.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

²⁸Castro de Cifuentes, M. (2019). Los contratos normativos y los contratos marco en el derecho privado contemporáneo. Estudios Socio-Jurídicos, 21(1), 121-150.

²⁹ Ospina Fernández, G. (2005). TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURÍDICO. Editorial Temis S.A.

3. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA No. 1507122008713, EMITIDA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO.

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el

*asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)*³⁰ (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, no sólo por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, sino porque supera totalmente los baremos jurisprudenciales reiterados en muchas oportunidades por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto

³⁰ Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.
Página **82** de **114**

la parte demandante sobre los conceptos de daño moral, daño a la vida de relación, lucro cesante consolidado y futuro, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

4. LÍMITE ASEGURADO DE LA PÓLIZA No. 1507122008713, EMITIDA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A.

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro No. 1507122008713, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación alguna de mi representada, cabe mencionar que, en el remoto evento y muy improbable escenario de que a mi procurada se le hiciera exigible la afectación del negocio contractual expedido por ella, mediante la cual se aseguró la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, se estipularon las condiciones, los límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, los deducibles pactados, etc. De manera que exclusivamente son estos los parámetros que determinarían en un momento dado la posible responsabilidad que podría atribuirse a mi poderdante, en cuanto enmarcan la obligación condicional que contrajo y las diversas cláusulas del aseguramiento, incluso y sin perjuicio de las estipulaciones que la exoneran de responsabilidad, que pido declarar en el fallo.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

Página **83** de **114**

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”³¹.

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza No. 1507122008713 ,se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de

³¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.

esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la póliza No. 1507122008713, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	1.000,00 SMLMV		10 % Min 1 (SMLMV)
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	1.000,00 SMLMV		NO APLICA
1.2 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL			NO APLICA

Sin embargo, el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a la vigencia comprendida entre el 20 de marzo del 2022 hasta el 19 de marzo del 2023.

En la causa que nos asiste, de acuerdo con los límites máximos establecidos en el contrato aseguratorio, el monto máximo que hipotéticamente correspondería a mi procurada indemnizar, por los reprochados en el libelo genitor, es de 1.000 SMLMV para el amparo dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual, muerte o lesiones a una persona. De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

Página 85 de 114

5. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna. Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

6. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A. Y LOS CODEMANDADOS.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia³² ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdesse que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

³² Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
Página **86** de **114**

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte³³ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

“La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario. (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

³³ Ibídem.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

7. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS.

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley en virtud de lo reglado en el artículo 282 del Código General del Proceso.

CAPÍTULO III

CONTESTACIÓN FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR BANCOLOMBIA S.A A MI REPRESENTADA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO

Frente al hecho primero: ES CIERTO, la actividad principal a la que se dedica BANCOLOMBIA S.A de acuerdo a lo regulado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano y el Decreto 913 de 1993.

Frente al hecho segundo: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que refiere a la vinculación contractual entre BANCOLOMBIA S.A y GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO., la cual es desconocida para mi mandante por cuanto aquella no participó en la misma y, por tanto, le resulta ajeno lo que en este hecho se afirma. La demandante deberá acreditar su dicho mediante los elementos de convicción idóneos, conducentes y pertinentes.

Frente al hecho tercero: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, mi representada no participó en la misma y, por tanto, le resulta ajeno lo que en este hecho se afirma. La demandante deberá acreditar su dicho mediante los elementos de convicción idóneos, conducentes y pertinentes.

Frente al hecho cuarto: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que refiere a las obligaciones de guarda material y jurídica de los bienes entregados en Leasing entre BANCOLOMBIA S.A y GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO., la cual es desconocida para mi mandante, por cuanto aquella no participó en la misma y, por tanto, le resulta ajeno lo que en este hecho se afirma. La demandante deberá acreditar su dicho mediante los elementos de convicción idóneos, conducentes y pertinentes.

Frente al hecho quinto: **No le consta** a mi procurada, la manifestación que realiza la llamada en garantía, para efectos de garantizar la operación fue constituida para esos fines una póliza. No obstante, es cierto, la existencia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil No. 1507122008713, con vigencia comprendida entre el 20 de marzo del 2022 al 19 de marzo del 2023 y se aclara que figuraba como tomador **GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SA EN REORGANIZACION.**, como asegurado **BANCOLOMBIA S.A.**, y como beneficiario **BANCOLOMBIA S.A.**, la cual ampara perjuicios patrimoniales y que fue expedida por mi representada MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A empero, se deberá probar por parte del extremo demandante los elementos de la responsabilidad y el deber jurídico a cargo de la llamada en garantía, para efectos de que eventualmente sea viable la afectación del contrato de seguro, lo cual no ha ocurrido.

Por lo anterior debe ser claro para el Despacho que la existencia de un contrato de seguros no implica *per se* la obligación indemnizatoria en cabeza de mi representada. Lo anterior,

Página **89** de **114**

toda vez que se debe cumplir en primer lugar, con la acreditación del hecho dañino en cabeza del asegurado, elemento este que no se encuentra acreditado al interior del presente trámite. en segundo lugar, que se encuentren agotados los presupuestos de la modalidad de la póliza otorgada por mi procurada, es decir, que los hechos hubieran ocurrido durante la vigencia de la póliza, y, en tercer lugar, que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro.

Frente al hecho sexto: Lo que se manifiesta en este numeral no es un hecho sino una apreciación subjetiva de la llamada en garantía en el que manifiesta su inconformidad por la vinculación de su representada al presente proceso. Lo manifestado por la llamada en garantía será dirimirá de acuerdo a las etapas procesales pertinentes y está sujeta a decisión judicial.

Frente al hecho séptimo: Existen varias afirmaciones por parte de la llamada en garantía, por lo tanto responderé de la siguiente manera:

- Respecto de la primera afirmación le corresponde contestarla al locatario, y a saber que dicha afirmación es desconocida por mi mandante, por cuanto aquella no participó en la misma y, por tanto, desconoce los términos y negociaciones del contrato entre éste y la llamante en garantía.
- No se admite la utilización del término “ siniestro” por cuanto el mismo no se encuentra acreditado, dado que en el presente caso no se reúnen los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual en cabeza del conductor asegurado ni es procedente la afectación de dicha póliza, se recalca que contrato de seguro es ley para las partes por lo tanto su afectación será bajo las condiciones indicadas en la póliza de seguros y en caso de reunir los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, que en ningún caso puede ser objeto de enriquecimiento sin causa.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO

Frente a la pretensión 1 a contestar de la siguiente manera: Primero: Respecto a la solicitud de vinculación de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, la misma se encuentra realizada y frente a ello no es necesario realizar ningún pronunciamiento de fondo. Segundo: Entorno a que Bancolombia ostenta el derecho legal y contractual de exigir de ellos la indemnización de perjuicios **ME OPONGO** a la prosperidad de dicha pretensión, dado la naturaleza del contrato de seguro es de carácter indemnizatorio, de manera que, bajo ningún fundamento jurídico puede o debe ser fuente de enriquecimiento sin causa y debe estar sujeto a los límites del valor asegurado, las condiciones del riesgo asegurado, y la configuración en cabeza del extremo demandante de los elementos de la responsabilidad civil. En este caso, la afectación de dicho contrato es improcedente, y en consecuencia el llamado en garantía, toda vez que la condición de la que pende el nacimiento de la obligación indemnizatoria en contra de mi prohijada no ha surgido, según lo pactado en el contrato respectivo, por no haberse demostrado la existencia de responsabilidad civil en cabeza del asegurado y por contera no se probó el acaecimiento del riesgo asegurado en la póliza de responsabilidad No. 1507122008713.

Frente a la pretensión 2: NO ES NECESARIO REALIZAR PRONUNCIAMIENTO a la prosperidad de la pretensión, en el entendido que, la solicitud del llamamiento en garantía fue admitida por el Despacho en auto del 4 de mayo de 2023 dentro del asunto objeto de controversia, por lo tanto, es inocua dicha declaración. .

III. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL LLAMAMIENTO

1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE MAPFRE

Página 91 de 114

SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Sin perjuicio de las excepciones planteadas en la contestación de la demanda, se formula la presente de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas de la Póliza. Toda vez que de la mera lectura de la póliza podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante la póliza por la que se vincula a mi representada a este proceso, la aseguradora indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, excluyendo el daño moral, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en la póliza, pese a ello en este caso la responsabilidad del accidente es atribuible a la propia víctima.

En el presente caso los reclamantes no han demostrado la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado en la ocurrencia de accidente de tránsito, pues el fatal deceso del señor Jorge Enrique Ávila, se causó por la imprudencia en la conducción de la motocicleta que él mismo conducía, lo cual se corrobora con el IPAT, consigna la hipótesis 142 en cabeza del conductor de la motocicleta de placa KZE-12D, lo anterior denota que fue la propia víctima quien causo el daño por el que hoy se promueve este proceso pero que en ninguna medida puede ser indemnizado con cargo a la póliza número 1507122008713, pes operó un excluyente de responsabilidad que en definitiva comportará la negación de todas las pretensiones de la demanda.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha indicado con claridad que cuando la conducta imprudente de la víctima fue suficiente para causar el daño, debe liberarse de toda responsabilidad al extremo pasivo de la litis así:

“La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.

(...)

Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él ya haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella.

(...)

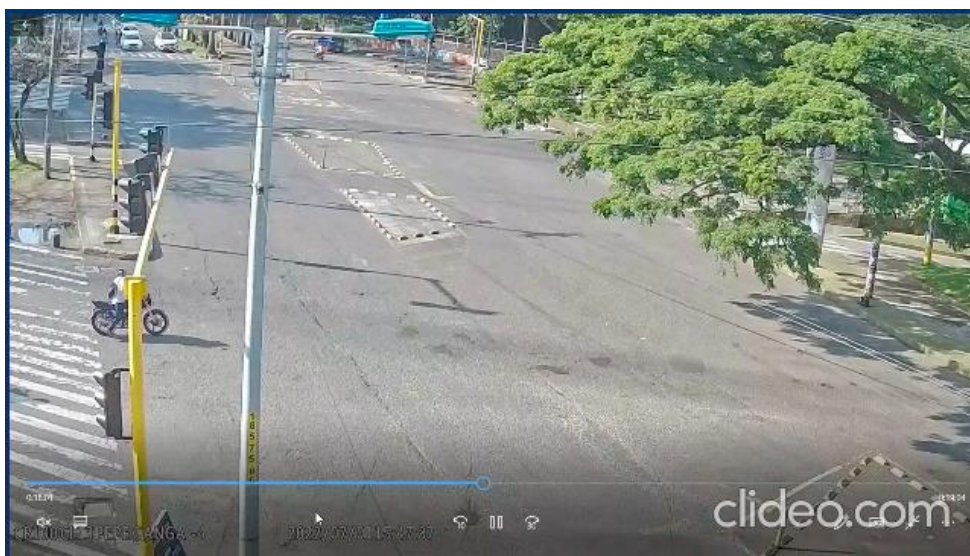
En todo caso, así se utilice la expresión “culpa de la víctima” para designar el fenómeno en cuestión, en el análisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto técnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputación es de carácter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la

*infracción de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relación de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio interés. Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que **la “culpa de la víctima” corresponda – más precisamente – a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no solo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño,** con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del código Civil, aun cuando allí se aluda a “imprudencia” de la víctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son “capaces de cometer delito o culpa” o a comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre un daño)*

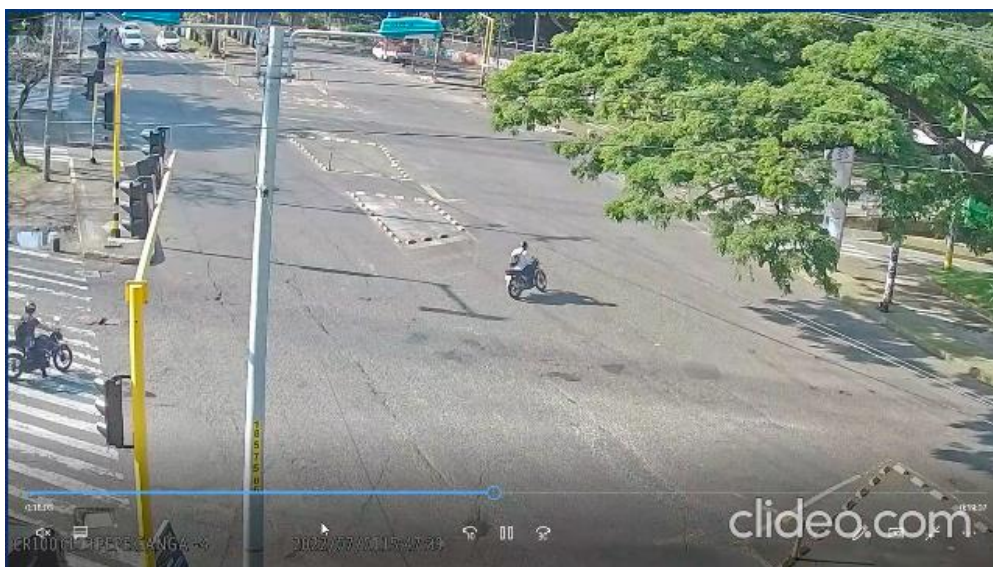
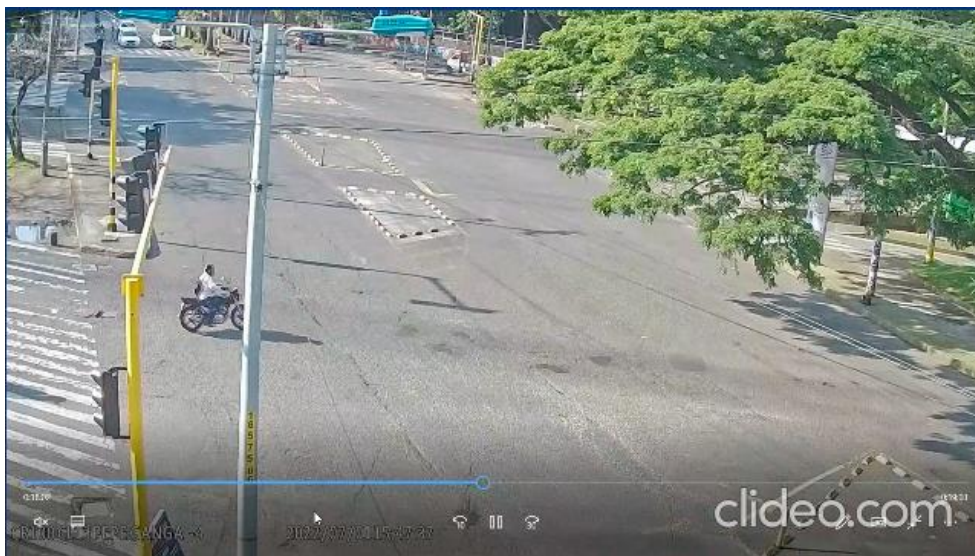
*Así lo consideró esta Corporación hace varios lustros cuando precisó que “en la estimación que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para que tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fenómeno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la víctima, **porque no se trata entonces del hecho-fuente de la responsabilidad extracontractual que exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extraño a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a***

producir una consecuencia jurídica patrimonial en relación con otra persona".³⁴(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Lo anterior debe tenerse en cuenta porque de las mismas pruebas que obran en el expediente se puede concluir que el señor Jorge Enrique Ávila fue quien se pasó el semáforo en rojo y ocasionó el accidente. Por ello, el IPAT demuestra dicha hipótesis y además el video con el que la parte actora pretende imputar responsabilidad demuestra dicha conducta imprudente, veamos:, veamos:



³⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC7534-2015. Sentencia del 16 de junio de 2015. Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramírez.
Página **95** de **114**



En el mismo video que la parte aporta se observa que el motociclista señor Jorge Ávila sobrepasó el semáforo a las 15:47:37 es decir bastantes segundos antes de que se evidencie la circulación de los demás automotores, e incluso se advierte en el video como otro motociclista espera el cambio del semáforo antes de arrancar la marcha, sin embargo, para ese momento el señor Ávila ya había infringido la señal de tránsito. Nótese como en

Página **96** de **114**

la última imagen hay un motociclista que aún no ha arrancado la marca porque la luz del semáforo claramente no se lo permitía, sin embargo ya el señor Ávila Castellanos había tomado la fatal decisión de pasar la luz de pare que indicaba el semáforo y terminó exponiéndose a un riesgo que en efecto se terminó materializando pero que en ninguna medida le es atribuible a la parte demandada.

Así pues, teniendo en cuenta que el señor Hector Fabio Mora Rivera como conductor del vehículo de servicio publico no tuvo ninguna injerencia con el fatal fallecimiento del señor Enrique Ávila, en razón a que, la conducta del conductor de la motocicleta fue el único factor relevante y adecuado que incidió en el accidente de tránsito ocurrido el día 01 de julio del 2022, por cuanto fue a causa de su impericia en la conducción de la motocicleta, que se genera la colisión con el vehículo de placas VCS-574, por cuanto en este caso medió un hecho de la víctima que rompe el nexo causal que pretende endilgar la parte actora.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la Aseguradora deberá ser absuelta de cualquier obligación indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurre el asegurado. Sin embargo, los demandantes no lograron estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de las demandadas y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró. El riesgo fue descrito dentro de las condiciones del contrato de seguro de la siguiente manera:

6. Responsabilidad Civil Extracontractual

La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante y daño moral, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en esta póliza. .

El valor asegurado, señalado en la carátula de la póliza, representa el límite máximo de la

19

indemnización a pagar por daños a bienes de terceros y/o muerte o lesiones a terceras personas. Este monto asegurado se considera como límite único combinado restituible por evento.

Estos límites operarán en exceso de los pagos correspondientes a los amparos o coberturas que tengan carácter indemnizatorio o reparatorio del daño en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, FOSYGA, PAS (Planes Adicionales de Salud), EPS, ARL, ARS, Fondos de Pensiones, o de otras entidades de seguridad social.

En conclusión, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que tal como se dijo anteriormente nos encontramos ante una situación en la que no existe nexo causal, pues no se ha demostrado que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de las acciones u omisiones del asegurado ni de alguien autorizado por este. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora. En efecto, en la póliza de automóviles de servicio público No. 1507122008713, se pactó lo siguiente:

Cláusula 1 - Amparos

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., denominada en adelante La Compañía, cubre dentro de la vigencia del seguro los daños corporales causados directa y exclusivamente por accidente de tránsito a terceros afectados y personas ocupantes del vehículo de servicio público especial, los perjuicios, daños o pérdidas que sufra el Asegurado, de acuerdo con las condiciones generales estipuladas a continuación y a las particulares indicadas en la carátula o en los anexos de la póliza.

Los amparos que pueden ser contratados de acuerdo con los productos que ofrece la Compañía, se enumeran a continuación:

1. Amparo básico
 - Responsabilidad Civil Extracontractual

De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguros en comento no es otro que la “*Responsabilidad Civil Extracontractual*” en que incurra el asegurado de acuerdo con la legislación colombiana. Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la póliza de automóviles de servicio público No. 1507122008713, entrará a responder, si y sólo si el asegurado o el conductor autorizado, es declarado civilmente responsable por un hecho constitutivo de responsabilidad civil contractual, acreditada mediante los medios idóneos. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad Civil constituirá el “*siniestro*”, esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del Co. Co.).

Sin embargo, en este caso encontramos que tal riesgo no se estructuró, pues de acuerdo a los medios de prueba obrantes en el expediente, la parte activa del litigio no logró demostrar y acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 01 de julio 2022, por lo tanto, no cumplió con su carga procesal y legal de demostrar la ocurrencia del siniestro, es decir, existe una fractura del nexo causal y, por ende, la negación de todas las pretensiones de la demanda. Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no tuvo ninguna injerencia las conductas del conductor del

Página 99 de 114

automóvil asegurado en la ocurrencia del accidente, ni se ha demostrado que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de la responsabilidad del conductor del mismo vehículo. Como consecuencia, no hay obligación condicional por parte de la Aseguradora.

2. FALTA DE COBERTURA MATERIAL DEL CONTRATO DE SEGURO FRENTE A LOS PERJUICIOS INMATERIALES – DAÑO MORAL

De conformidad con nuestra legislación civil en los contratos de seguro el asegurador cuenta con la facultad de delimitar la extensión de los amparos o coberturas asumidos por el mismo, de tal suerte, este sólo se obligará respecto a aquellos amparos expresamente otorgados. No obstante, de la simple lectura de las condiciones de la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, es claro que esta no brinda cobertura respecto a los perjuicios morales.

En el entendido de que con base al artículo 1056 del Código de Comercio el asegurador puede a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume, en reciente fallo del 04 de abril de 2022³⁵ la Corte recordó:

*(...) **ante la amplitud de los eventos que son susceptibles de ser amparados, la aseguradora puede especificar «los riesgos cuya cobertura se obligan en virtud de la misma»** (SC8435, 2 jul. 2014, rad. n.º 2002-00098-01), como lo reconoce el artículo 1056 del Código de Comercio, a saber: «[c]on las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado».*

Refiriéndose a este precepto, la Corporación dijo que en la especificación de los riesgos

³⁵ Sentencia SC487-2022 del 04 de abril de 2022. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Página **100** de **114**

«se reconoce plena autonomía al asegurador, a quien el artículo 1056 ejusdem, norma aplicable a los seguros de daños y de personas, le otorgó la potestad de delimitar espacial, temporal, causal y objetivamente los eventos por cuya ocurrencia se obligaría condicionalmente a indemnizar al beneficiario, pues estatuyó que podía asumir, con las restricciones legales» (SC4527, 23 nov. 2020, rad. n.º 2011-00361-01).

(...)

Estas estipulaciones, conocidas como «cláusulas de exclusión», tienen por finalidad limitar «negativamente el ‘riesgo asegurado’, al dejar por fuera de cobertura algunas situaciones que podrían estar allí comprendidas y que, por ende, de acontecer no son indemnizables. De tal manera que su consagración no conduce a la desaparición o alteración del componente económico previsto en favor de los beneficiarios, sino a la imposibilidad de que las reclamaciones por los hechos al margen de la protección tengan éxito» (SC4574, 21 ab. 2015, rad. n.º 2007-00600-02). (Énfasis de autoría)

Al respecto, resulta oportuno señalar que, a su vez, la Doctrina ha sido pacífica al entender el contrato de seguro como un acto jurídico que proviene de la voluntad de las partes, siendo, por tanto, una expresión del principio de la autonomía de la voluntad privada. De tal suerte, autores como como Castro (2019) han sostenido que:

“Quien celebra un negocio jurídico en virtud de la autonomía privada está creando una nueva relación jurídica, que no existía aún. [...] La autonomía privada únicamente tiene sentido desde el derecho, como la posibilidad de crear, modificar o extinguir relaciones y normas jurídicas. [...] Se trata de un poder normativo, es decir, una potestad de crear

*normas jurídicas y la autonomía de la voluntad es la fuente de que ellas se derivan”.*³⁶

Igualmente, como lo explica Ospina Fernández (2005), este postulado se fundamenta en la independencia que otorga el legislador a los particulares para regular sus propias relaciones sociales. En otras palabras, se otorga eficacia jurídica a la iniciativa privada para atribuir los efectos que mejor se enmarquen a su propósito particular³⁷. Así pues, como una manifestación de la autonomía de la voluntad privada, de conformidad con las condiciones particulares y generales del contrato de seguro instrumentado a mediante la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada delimitando la extensión del riesgo asumido por ella, estipulándose al respecto lo siguiente:

2.1.19. Los derivados de la pérdida de beneficios y los perjuicios morales del asegurado y de las víctimas en ninguna forma.

De tal suerte, a fin de que la póliza respecto a la cual se vincula a mi procurada a este trámite brindara cobertura en relación a los perjuicios inmateriales (daño moral) era necesario que tales amparos y/o coberturas fueran expresamente concertadas, no obstante, de la simple lectura de las condiciones de la póliza se colige como este amparo no fue otorgado por mi procurada, luego, es palmaria la falta de cobertura material respecto a los perjuicios morales, aparejando ello que ante una eventual, remota e hipotética condena en contra de los intereses de mi procurada la misma no podrá ser condena en forma alguna al pago o resarcimiento de tales perjuicios.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

³⁶Castro de Cifuentes, M. (2019). Los contratos normativos y los contratos marco en el derecho privado contemporáneo. Estudios Socio-Jurídicos, 21(1), 121-150.

³⁷ Ospina Fernández, G. (2005). TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURÍDICO. Editorial Temis S.A.

3. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA No. 1507122008713, EMITIDA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO.

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el

*asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)*³⁸ (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, no sólo por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, sino porque supera totalmente los baremos jurisprudenciales reiterados en muchas oportunidades por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto

³⁸ Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.
Página **104** de **114**

la parte demandante sobre los conceptos de daño moral, daño a la vida de relación, lucro cesante consolidado y futuro, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

4. LÍMITE ASEGURADO DE LA PÓLIZA No. 1507122008713, EMITIDA POR MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A.

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro No. 1507122008713, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación alguna de mi representada, cabe mencionar que, en el remoto evento y muy improbable escenario de que a mi procurada se le hiciera exigible la afectación del negocio contractual expedido por ella, mediante la cual se aseguró la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, se estipularon las condiciones, los límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, los deducibles pactados, etc. De manera que exclusivamente son estos los parámetros que determinarían en un momento dado la posible responsabilidad que podría atribuirse a mi poderdante, en cuanto enmarcan la obligación condicional que contrajo y las diversas cláusulas del aseguramiento, incluso y sin perjuicio de las estipulaciones que la exoneran de responsabilidad, que pido declarar en el fallo.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

Página **105** de **114**

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”³⁹.

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza No. 1507122008713 ,se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de

³⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.
Página **106** de **114**

esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la póliza No. 1507122008713, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	1.000,00 SMLMV		10 % Min 1 (SMLMV) NO APLICA
1.2 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL			

Sin embargo, el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a la vigencia comprendida entre el 20 de marzo del 2022 hasta el 19 de marzo del 2023.

En la causa que nos asiste, de acuerdo con los límites máximos establecidos en el contrato aseguratorio, el monto máximo que hipotéticamente correspondería a mi procurada indemnizar, por los reprochados en el libelo genitor, es de 1.000 SMLMV para el amparo dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual, muerte o lesiones a una persona. De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

Página 107 de 114

5. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna. Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

6. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A. Y LOS CODEMANDADOS.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia⁴⁰ ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdesse que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

⁴⁰ Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
Página **108** de **114**

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte⁴¹ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

“La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario. (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

⁴¹ Ibídem.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

7. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS.

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley en virtud de lo reglado en el artículo 282 del Código General del Proceso.

V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE

a. Ratificación de documentos provenientes de terceros:

El Art. 262 del C.G.P., preceptúa que: *“(…) Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (…)”*.

Por supuesto, esta ratificación concebida en la legislación procesal actual, le traslada a quien quiere valerse de documentos provenientes de terceros, el deber de obtener que lo ratifiquen sus respectivos autores, cuando así lo requiere la parte contraria frente a la cual se aportan tales documentos. Resulta lógico que sea quien aporta los documentos provenientes de terceros, quien tenga en sus hombros la carga de hacerlos ratificar de quien los obtuvo o creó, si es que quiere emplearlos como medio de convicción.

Entonces, cabe resaltar que el Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo; y en tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno

demonstrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y son los siguientes:

1. Declaración extraprocesal No. 3175 de la notaria 25

VI. MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

1. DOCUMENTALES.

- Copia íntegra de la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, con sus condiciones particulares y generales.

2. INTERROGATORIO DE PARTE.

- a. Comendidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a MARIA RUBIELA GRIJALBA, DORIS EUGENIA AVILA CASTELLANOS, FERNANDO ANTONIO AVILA CASTELLANOS y GLORIA STELLA AVILA CASTELLANOS, ANA ÁVILA GRIJALVA y ANA ÁVILA GRIJALBA en su calidad de demandantes, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- b. Comendidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a HECTOR FABIO MORA RIVERA, los representantes legales de la empresa prestadora del servicio, GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A y al representante de BANCOLOMBIA S.A, por medio de cuestionario verbal o escrito, que se presentará en

Página **111** de **114**

audiencia que para tal fin señale el despacho, previa citación de los absolventes, con el lleno de formalidades previstas en el artículo 200 C.G.P.

3. DECLARACIÓN DE PARTE.

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, ausencias de cobertura, exclusiones, términos y condiciones de los contratos de seguro Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713

4. TESTIMONIALES.

Siguiendo lo preceptuado por los artículos 208 y siguientes del Código General del Proceso, solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de las siguientes personas:

Dra. MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ, asesora externa de mi representada con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda, así como de los fundamentos de derecho y de la Póliza de Seguro. Este testimonio se solicita igualmente para que deponga sobre las condiciones particulares y generales de la Póliza, sus exclusiones, y en general, sobre las excepciones propuestas frente a la demanda. Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las características, condiciones, vigencia, coberturas, exclusiones, etc., de los Contratos de Seguro objetos del presente litigio. La doctora AGUDELO ORTIZ podrá ser citado en la Calle 13 No. 10 -22, apartamento 402 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico camilaortiz2797@gmail.com

5. INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS.

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

VII. ANEXOS

- Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- Poder general otorgado por la compañía Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., que ya reposa en el expediente
- Certificado de existencia y representación legal de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., expedido por la Cámara de Comercio y por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ya reposa en el expediente.

VIII. NOTIFICACIONES

Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda. Por los demás demandados donde indiquen en sus respectivas contestaciones.

A mi prohijada en la Carrera 14 # 96-34 de la ciudad de Bogotá, o, en su defecto, en el correo electrónico: njudiciales@mapfre.com.co

Por parte del suscrito se recibirán notificaciones en la Secretaría de su despacho o en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.